



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO
RUIZ GALLO**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLITICAS**



TESIS:

“La confidencialidad de la Policía Nacional e intromisión de los medios de comunicación, frente al principio de presunción de inocencia”

Autora:

Bach. Cáceda Román, Sandra Priscila

Asesor:

Mag. Yzquierdo Hernández Leopoldo

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Lambayeque, 2021

Tesis: “La confidencialidad de la Policía Nacional e intromisión de los medios de comunicación, frente al principio de presunción de inocencia”,
presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA, por:

Bach. Cáceda Román, Sandra Priscila

Autora

Dr. Yzquierdo Hernández Leopoldo

Asesor

Aprobada por:

Abog. Martínez Oblitas Carlos Manuel
Presidente

Mag. Colina Moreno Mary Isabel
Secretaria

Abog. Vargas Rodríguez César
Vocal

DEDICATORIA

Al ser una etapa difícil por la que todos atravesamos, quiero mostrar respeto y dedicar mi tesis a todas aquellas víctimas de esta pandemia, en especial a mis ex docentes fallecidos.

De manera especial a mi madre, por ser la mujer más admirable y ejemplar, mentora de mis principios y valores.

A mi hermana, por su apoyo constante, y la gran admiración que siento por todos sus logros académicos, y la profesional integra que demuestra ser día a día.

A mi fiel compañero de cuatro patas, que me ayudó en gran parte a sobrellevar los momentos de incertidumbre, vividos.

También dedico este trabajo a mi voluntad, esfuerzo, dedicación, perseverancia y tiempo invertido en él.

AGRADECIMIENTO

Siendo esta investigación un proceso que requiere de no solo la dedicación personal, sino el apoyo psicoafectivo, considero necesario mostrar mi gratitud y eterno agradecimiento a mi madre por su impulso moral, emocional y su amor incondicional.

Por último, y no por ello menos importante, mi especial consideración y agradecimiento, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por haber aportado a mi formación, tanto profesional como ser humano, a mis catedráticos y a mi asesor de tesis.

INDICE

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO	iii
INDICE	iv
INDICE DE TABLAS	ix
INDICE DE ILUSTRACIONES	x
RESUMEN.....	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCCIÓN	13
CAPITULO I.....	17
ASPECTOS METODOLOGICOS	17
1.1. La realidad problemática.....	17
1.1.1. El planteamiento del problema	17
1.1.2. La formulación de problema.....	22
1.2. Sobre la justificación y la importancia	22
1.2.1. La justificación	22
1.2.2. La importancia	24
1.3. Los objetivos.....	25
1.3.1. El objetivo general.....	25
1.3.2. Los objetivos específicos	25

1.4. La hipótesis.....	26
1.5. Variables	26
1.5.1. La variable independiente	26
1.5.2. La variable dependiente	26
1.6. Los métodos de la investigación.....	27
CAPITULO II.....	31
LA TEORÍA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS DILIGENCIAS URGENTES E INAPLAZABLES.....	31
2.1. Investigaciones precedentes sobre el tema	32
2.2. La confidencialidad como teoría.....	36
2.3. Investigación preparatoria del proceso penal	38
2.4. Diligencias Preliminares.....	40
2.5. La Reserva de las Diligencias Preliminares antes de la formalización de la investigación.	41
2.6. Actos urgentes e inaplazables	44
2.7. Crítica a las diligencias urgentes e inaplazables por parte de la Policía Nacional de Perú.	46
2.8. La intromisión de los medios de comunicación en la información criminal en el Perú.	48
CAPITULO III	51

LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES PARA LA ACCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO PENAL	51
3.1 Investigaciones previas sobre la garantía de presunción de inocencia	51
3.2 La presunción de inocencia como garantía.....	53
3.3 La Libertades de Opinión, Expresión e Información frente al principio de presunción de inocencia.	57
CAPITULO IV	59
LÍMITES DEL DERECHO PENAL GARANTISTA RESPECTO AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	59
4.1. La Teoría del Derecho Penal Garantista	59
4.2. Garantismo jurídico	60
4.3. Derecho Penal Garantista.....	64
4.4. Presunción de inocencia y garantismo.....	66
CAPÍTULO V	69
ANÁLISIS Y RESULTADOS	69
Las publicaciones en los medios de comunicación local y nacional, sobre hechos criminales y el grado de afectación del investigado	69
4.1. Análisis de los resultados:	69
4.1.1. Resultados del análisis estadístico.....	70
4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.	78
CAPÍTULO VI	98

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	98
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	98
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la teoría de la confidencialidad de la información que sirve de guía a las instituciones públicas, respecto del estado criminal de las personas durante las diligencias urgentes e inaplazables, a cargo de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación”	98
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Recopilar la doctrina sobre los límites constitucionales que operan sobre la acción de los medios de comunicación y su relación con el derecho penal”.....	106
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar los límites que establece el derecho penal garantista respecto al principio de presunción de inocencia”.	109
5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Evaluar las publicaciones que realizan los medios de comunicación local y nacional, luego de conocerse un hecho criminal y el grado de afectación que esto genera para el investigado”.	112
5.1.5. Discusión sobre el objetivo: “Proponer la incorporación de protocolos policiales y publicitarios que permitan garantizar el principio de presunción de inocencia del imputado antes de que se formalice la investigación”.	115
5.2. La validación de las variables	119

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación.....	119
5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La afectación del principio de presunción de inocencia.....	121
5.3. La contrastación de hipótesis.....	122
Conclusiones.....	127
RECOMENDACIONES	130
Bibliografía.....	131
ANEXOS.....	136
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos....	136

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 1”.....	79
Tabla 2: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación”.....	82
Tabla 3: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 3”.....	85
Tabla 4: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 4”.....	88
Tabla 5: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 5”.....	91
Tabla 6: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 6”.....	94

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 1”.....	80
Ilustración 2: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 2”.....	83
Ilustración 3: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 3”.....	86
Ilustración 4: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 4”.....	89
Ilustración 5: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 5”.....	92
Ilustración 6: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 6”.....	95

RESUMEN

Esta tesis evalúa la posible afectación de la garantía de presunción de inocencia del detenido frente a la no confidencialidad de las diferentes diligencias realizadas en la etapa previa a la formalización de la investigación, debido en muchos casos a la innecesaria exposición de la identidad del imputado por parte de la policía nacional y la intromisión de los medios de comunicación, originando un juicio de culpabilidad social hacia el implicado, un tipo de lapidamiento social prematuro sin opción de llevar un debido proceso penal no contaminado. es por ello que se pretende lograr esclarecer dentro del derecho penal garantista aquellos lineamientos que son parte estructural de la presunción de inocencia pero que a la vez actúan como parámetros para evitar su transgresión; tal vez inexistentes en nuestro cuerpo normativo penal peruano, o quizás recogidos ya implícitamente en alguna norma subsidiaria. por último, vislumbramos también una posible sanción para quienes extralimitándose de sus funciones sea el caso de servidores públicos o privados, estos puedan lesionar derechos fundamentales o garantías personalísimas, toda vez que originan una contaminación arbitraria en el debido proceso, dejando al imputando en una especie de indefensión con el órgano de justicia

Palabras Claves: Confidencialidad, Policía Nacional, Medios de comunicación, Presunción de Inocencia.

ABSTRACT

This thesis assesses the possible impact on the guarantee of presumption of innocence of the detainee against the non-confidentiality of the different procedures carried out in the stage prior to the formalization of the investigation, due in many cases to the unnecessary exposure of the identity of the accused by part of the national police and the meddling of the media, causing a trial of social guilt towards the person involved, a type of premature social stoning without the option of carrying out an uncontaminated criminal due process. It is for this reason that it is intended to clarify within the guarantor criminal law those guidelines that are a structural part of the presumption of innocence but that at the same time act as parameters to avoid its transgression; perhaps nonexistent in our Peruvian criminal law, or perhaps already implicitly included in some subsidiary rule. Finally, we also envision a possible sanction for those who, exceeding their functions, whether in the case of public or private servants, may harm fundamental rights or very personal guarantees, since they cause arbitrary contamination in due process, leaving the accused in a kind of defenseless with the organ of justice

Key Words: Confidentiality, National Police, Media, Presumption of Innocence.

INTRODUCCIÓN

El proceso penal en el Perú adopta una posición garantista frente a la situación que le corresponde a cada una de las partes que intervienen en la investigación del delito, desde tal perspectiva se ha podido reconocer una problemática que altera dicho sentido de protección, sobre todo en lo que respecta al sujeto que se le atribuye la acción delictiva y afronta por ello un proceso penal. Siendo así, la especificación que asume esta tesis se refiere a la vulneración del principio de presunción de inocencia que se advierte de la intervención de parte de la Policía Nacional y su relación con la información que brinda a los medios de comunicación respecto a la identidad del sujeto cuya acción se considera un delito.

Partiendo de esta relación se reconoce el accionar vulneratorio producida por la información que se difunde a través de los medios de comunicación, la misma que alcanza criterios que no le corresponde señalar, puesto que se indican condiciones como la de imputado, delincuente y demás calificativos que ponen en tela de juicio la identidad del sujeto investigado desde la perspectiva de su dignidad. Esta descripción se reconoce incluso como un problema tangencial bautizado por algunos juristas como la criminología mediática.

Tal situación, conlleva a la convicción de una realidad de inseguridad jurídica por parte de la sociedad, esto es altera la opinión pública con criterios no jurídicos, dado que no se encuentran calificados para aseveraciones que si le corresponden al sistema jurisdiccional. Este elemento, provoca no sólo esta alteración al orden garantista, sino que también puede convertirse en un riesgo al

resguardo de la información que se contiene en la investigación penal; justificante suficiente para ocuparse de la observación de aquellas circunstancias jurídicas que estarían provocando tal alteración.

Es por todo ello que esta investigación se ha proyectado inicialmente desde la interrogante ¿De qué manera la no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación, afecta el principio de presunción de inocencia?, la misma que bajo el conocimiento previo al desarrollo de la tesis, se pudo contestar bajo la siguiente afirmación: La confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación, afecta el principio de presunción de inocencia, por lo que se requerirá el control de dicha actividad.

Bajo este esquema se ha plasmado en el Capítulo uno, la estructura metodológica que hubo de seguirse en la investigación, así pues, se muestran los métodos que se aplicaron teniendo en cuenta dos aspectos, el primero la interpretación de la regla tanto exegética cuanto sistemática para reconocer la factibilidad y efectividad de las reglas que operan sobre la permisibilidad de parte de la Policía Nacional para otorgar a los medios de comunicación los datos del investigado. Luego en otro de los ámbitos metodológicos se ha podido hacer uso de los métodos de la observación de la realidad, tanto del formato hipotético deductivo cuanto el inductivo, para reconocer los efectos de vulneración que operan sobre la acción de los medios de comunicación en razón de la garantía del principio de presunción de inocencia.

Para la construcción del Segundo Capítulo, se ha tenido en cuenta la recopilación de fuentes bibliográficas que permitieron asumir una postura sobre la teoría de la confidencialidad desde una perspectiva general al inicio y luego relacionarla con el sentido que opera sobre el desarrollo de la investigación penal, así se verificó la connotación de garantía que se supone debe ofrecerse en dicho proceso. Esta condición adquiere mayor importancia cuando se involucra a un sujeto a razón de la noticia criminal que recibe la Policía Nacional y que promueve su intervención; siendo importante el hecho de asegurar la protección del principio de presunción de inocencia y las demás garantías que pesan sobre la actividad de esta institución que forma parte de la actividad procesal.

En el Tercer Capítulo se ha enfocado la perspectiva de los límites que operan sobre las acciones de los medios de comunicación, siendo ello un factor importante en la tesis, puesto que la formulación del problema invita a razonar esta acción informativa como el elemento detonante de la vulneración del principio de presunción de inocencia. Desde luego ha podido notarse la presencia de otros principios de carácter constitucional que amparan la acción periodística; sin embargo, se aprecia un nivel superior de seguridad que asiste al investigado puesto que se trata de sus derechos como ser humano relacionados a la dignidad, lo cual justifica su adecuada protección.

El Cuarto Capítulo, hace referencia a la doctrina en la que se basa el desarrollo normativo del principio de presunción de inocencia, esto es su construcción constitucional que a la vez supone el condicionamiento de límites para su ejercicio, los cuales habrán de ser respetados en toda la estructura del sistema

judicial y por consiguiente en el ámbito extrajudicial, dada su connotación constitucional. Por esta razón se advierte la importancia de establecer lineamientos de control que sopesen la actividad tanto jurisdiccional cuanto, para este caso, de los medios externos como lo es la publicidad.

Según lo que se aprecia en el Capítulo Quinto, el trabajo de campo se ha generado a través de la observación de la realidad, siendo así, se establecieron elementos de verificación como lo son aquellas publicaciones que permitieron determinar la existencia de acciones que vulneran la dignidad en primer lugar y el principio de presunción de inocencia finalmente. Estas condiciones se han trasladado a la construcción de un esquema de encuesta la cual permitió medir el nivel de validación de parte de los expertos respecto de las posturas de la investigación científica que se adoptaron mediante la sindicación de las variables.

Finalmente, en el Capítulo Sexto se ha construido la contrastación de la hipótesis que, partiendo de la discusión de aquellos contenidos generados por las metas de la investigación, con la cual se obtuvieron las posturas que propician la validación de cada una de las variables y con ello la construcción de una determinación final de esta tesis, la cual se ha comparado con la hipótesis inicial. Esta construcción ha permitido generar cada una de las conclusiones y las recomendaciones que se dejan al criterio evaluador de esta investigación.

La Autora.

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLOGICOS

1.1. La realidad problemática

1.1.1. El planteamiento del problema

Hoy en día, se puede verificar la intromisión de los medios de comunicación en el ámbito jurídico penal, que afecta de cierto modo, la independencia judicial, a través de la llamada presión mediática. Ya que crea en la sociedad, una idea subjetiva del derecho y emocional frente a la noticia, generando peligros sociales donde se ven afectados garantías y derechos fundamentales.

Dentro del contexto señalado anteriormente, mi motivación surge de observar a diario como los medios de comunicación no se limitan a cumplir con su rol informativo y coadyuvar a la fiscalización de la función pública, sino al contrario construyen a diario una realidad mediática; y no sabemos en qué medida ésta, se acerca o se aleja de la realidad fáctica.

Es decir, la sociedad vivencia la violencia, en ocasiones no de forma directa sino a través de la difusión continua de estos hechos delictivos, en la televisión, redes sociales o cualquier otro medio informativo. Pero no sabemos a ciencia cierta si la información es verídica, por ejemplo, si el número de delitos que nos muestran, es mayor o menor al número real. Sin duda somos conscientes de la criminalidad en nuestro país, pero no podemos verlo todo; sabemos de la comisión de delitos, por la realidad creada por los medios de comunicación y de ella dependen nuestras reacciones, temores, en definitiva, nuestro comportamiento.

Ahora bien, esta realidad se ve reflejada en el ámbito judicial, y uno de los problemas más notorios con el que nos encontramos es la vulneración del Principio de presunción de inocencia del detenido, hasta ese entonces presunto autor de un hecho delictivo, el cual es abordado por los medios periodísticos y expuesto por la Policía Nacional.

Y es aquí donde probablemente el meollo del asunto debería ser analizado con más cautela, pues a pesar de que los medios de comunicación se encargan de hacer posible la visualización y condenamiento prematuro del implicado en un delito, es preocupante también la confidencialidad que profesa la Policía Nacional ante estas situaciones, específicamente en ser esta institución la que se convierte en el punto de partida que origina la afectación de la garantía de presunción de inocencia del detenido, y es que a través de sus miembros permite en la gran mayoría de casos, esta suerte de exposición sin filtro previo, sin censura, sin una base sólida que permita generar certeza de aplicarle la etiqueta de “culpable” entregándolo a los medios de comunicación para que sin un reproche jurídico ni medio de defensa alguno, sea condenado por la sociedad.

Como es sabido, el nuevo Proceso Penal Peruano, hasta antes de su etapa judicial propiamente dicha, conlleva a la realización de un conjunto de acciones cooperativas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, encargándose ésta última de realizar actividades que se encuadran netamente a su función policial, a una custodia del detenido y la información que se maneje del mismo, así como también funciones de apoyo al Fiscal, esto durante las diligencias

urgentes e inaplazables, previas a la formalización de la investigación preparatoria, y que es regulado normativamente a través de los diferentes protocolos de actuación aprobados mediante Decretos Supremos, como por ejemplo uno de ellos tenemos el Decreto Supremo N° 003-2014-JUS y así entre otros.

En función a lo detallado es importante cuestionarse si, los operadores judiciales inmersos en el caso no advierten que las acciones cometidas por la innecesaria exposición que realiza la policía nacional del detenido y la aún más lesiva exposición mediática que realizan los diferentes medios de comunicación como consecuencia de la falta de confidencialidad de la policía lesionan posiblemente de una forma irreparable la imagen de la persona, pues ¿Qué sucede si el detenido resulta ser inocente?, ¿Dónde quedan los derechos necesarios y exigibles de un debido proceso y una investigación de los hechos? Pero sobre todo ¿Dónde queda entonces la llamada Presunción de Inocencia?

Por lo expuesto resulta necesario mencionar que es lo que nuestra Constitución recoge acerca de la Presunción de Inocencia, así en su Art. 2° numeral 24 literal e) señala “*e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.*”; así mismo es necesario traer a colación lo que también establece el Código Procesal Penal del 2004 cuando se refiere a la Presunción de Inocencia en su Artículo II del Título Preliminar, donde textualmente dice: “*1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo*

contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada (...). 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido”, dándonos a través de estos cuerpos normativos un alcance de que la presunción de inocencia tiene un carácter de garantía constitucional y a la vez de un principio aplicable al proceso penal.

Como podemos notar, en la actualidad, estos parámetros que salvaguardan el Principio de presunción de inocencia, parecen ser invisibles. Es más, el mismo límite que en esencia implica este principio, solo es una afirmación incierta del derecho penal garantista.

Y es que la presunción de inocencia es como ya se dijo, inherente a la persona; representa ese derecho, garantía invariable y suficiente para garantizar que solo un juez pueda condenar o absolver a un sujeto y no, la crítica social, desempeñar dicha tarea; lo que recuerda al pensamiento del Penalista Argentino José Cafferata Nores (1998), quien decía: “¿Por qué razón la duda debe beneficiar al imputado? Porque goza de un estado de inocencia que no necesita ser construido” (p. 13).

Así también tomaremos la opinión de Sánchez (2013), quien en el Código Procesal Penal Comentado menciona acerca de la presunción de inocencia: “(...) principio rector de ineludible observancia por las autoridades policiales, fiscales y jurisdiccionales. En tal sentido, la persona imputada de una infracción penal debe ser considerada como inocente, en tanto la autoridad judicial, dentro de un proceso

con todas las garantías, no establezca que es culpable mediante sentencia firme (...).
(p. 27)

Lo que nos permite advertir que doctrinariamente la presunción de inocencia, tiene un unísono definir y sobre todo que relevantemente la autoridad pública debe garantizar y velar por su cumplimiento y alcance, pero que lamentablemente en el actuar de la policía nacional conjuntamente con los medios de comunicación, no sucede o hacen caso omiso a lo establecido.

En síntesis, es preocupante como la policía nacional en conjunto con los medios de comunicación en el proceso de dar a conocer a la población sobre un hecho delictivo, que no necesariamente supera la etapa de investigación policial, abusa de esa libertad de informar; exagerando el suceso o exponiendo detalles del presunto autor e incluso de la misma víctima, vulnerando así derechos personalísimos, aspectos referidos a la intimidad, al honor por ejemplo, garantías procesales y constitucionales entre otros.

Después de haberse explicado la idea principal sobre lo que versará el presente trabajo de investigación, es necesario esbozar una posible solución a toda la problemática planteada, y es que como testigos de que el principio de presunción de inocencia no es debidamente protegido y su afectación comienza desde la exposición propiciada por la Policía Nacional conjuntamente con los medios de comunicación, resulta necesario plantear no solamente un lineamiento o protocolo

que permita un correcto trato hacia el detenido, así como el respeto a sus derechos, custodia de su información personal y por qué no de un marco jurídico, donde se puedan aplicar sanciones de carácter civil y penal a los miembros de la Policía Nacional (como civiles, fuera de su jurisdicción propia), trabajadores, periodistas de medios de comunicación que únicamente busquen lucrar con la exposición innecesaria y distribución de información errada o no comprobada, respecto a la culpabilidad de los implicados en un hecho delictivo, ante esto quedará pendiente la revisión de los distintos cuerpos normativos a fin de encontrar un camino que permita llegar a la solución planteada, generando así que la presunción de inocencia sea contrariada o afirmada de acuerdo un debido proceso penal.

1.1.2. La formulación de problema

¿De qué manera la no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación, afecta el principio de presunción de inocencia?

1.2. Sobre la justificación y la importancia

1.2.1. La justificación

El proyecto de tesis que se propone, se encuentra debidamente justificado, dicha justificación responde a dos enfoques diferenciados que permitirán comprender mejor este apartado, siendo ellos el social y el legal que desarrollaré a continuación:

A juicio propio, considero posee una **justificación social**, en el sentido que se realiza una investigación minuciosa para poder evaluar la posible afectación de la garantía de presunción de inocencia del detenido frente a la no confidencialidad de las diligencias urgentes e inaplazables a cargo de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación; pues esta garantía resulta inherente a toda persona implicada en un hecho delictivo siendo reconocida en nuestro ordenamiento jurídico con especial mención en nuestra Constitución y Código Procesal Penal.

Así también el trabajo se **justifica legalmente**, desde el punto de vista de que, muy a pesar que nuestra Constitución y Código Procesal Penal establecen que la presunción de inocencia de un implicado en un hecho delictivo solo puede desestimarse por sentencia judicial firme o pronunciamiento en sede judicial, pareciera que la Ley no contempla o el legislador ha olvidado fijar los parámetros que protejan eficazmente la presunción de inocencia en los casos donde la identidad del detenido es mostrada a la sociedad, quienes atribuyen culpabilidad de inmediato, sin un criterio jurídico sino meramente subjetivo; pero aún más problemático es la inexistencia de límites coercitivos y sancionatorios para quienes innecesariamente difunden información personal del detenido (como la policía nacional y los medios de comunicación), extralimitándose de sus funciones, y permitiendo así una contaminación en el debido proceso, la cual se genera desde el momento en que se disponen las investigaciones urgentes e inaplazables, previas a la formalización de la investigación, sin superar siquiera la etapa policial.

1.2.2. La importancia

Habiendo justificado válidamente mi proyecto de investigación en el acápite anterior, cabe mencionar la importancia del mismo.

Como primer punto, considero importante mi estudio porque permitirá verificar si existe realmente una vulneración de la garantía procesal de presunción de inocencia de una persona en calidad de detenido o implicado en un suceso delictivo a través de la exposición de su identidad y otros datos personales, partiendo primero por aquellos servidores públicos, que deberían ser los comprometidos de custodiar al sospechoso, pero a la vez actuando con cierta discrecionalidad y confidencialidad en las primeras diligencias de la investigación en colaboración a los operadores judiciales, con el fin de asegurar un correcto desarrollo del debido proceso, como es el caso de la Policía Nacional y también por parte de aquellos responsables de informar a la población, los medios de comunicación social, que curiosamente tienen acceso a imágenes exclusivas del presunto autor del hecho delictivo, en sede policial. Cuya divulgación de la identidad, e información personal son difundidos sin filtro previo ni censura.

Consecuentemente en este orden de ideas es importante porque permitirá dilucidar, identificar o plantear ciertos márgenes de protección de esta garantía de presunción de inocencia que como cabe mencionar dentro del marco jurídico constitucional, intrínsecamente ésta ya representa un límite frente a posibles vulneraciones de derechos del imputado.

Para concluir, lo considero importante también porque la posible solución al planteamiento del problema no solo se direcciona a la creación de un protocolo o directiva que permita un correcto trato y protección de los derechos del detenido sino también a una posible sanción de carácter civil y penal para quienes resulten responsables de dicha infracción. En cuanto a su alcance pretendo que este estudio genere reflexión y discusión dentro del área de ciencias jurídicas y a su vez sirva de marco referencial para nuevas investigaciones.

1.3. Los objetivos

1.3.1. El objetivo general

Determinar si, la no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación afectan el principio de presunción de inocencia.

1.3.2. Los objetivos específicos

- Estudiar la teoría de la confidencialidad de la información que sirve de guía a las instituciones públicas, respecto del estado criminal de las personas durante las diligencias urgentes e inaplazables, a cargo de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación.
- Recopilar la doctrina sobre los límites constitucionales que operan sobre la acción de los medios de comunicación y su relación con el derecho penal.

- Desarrollar los límites que establece el derecho penal garantista respecto al principio de presunción de inocencia.
- Evaluar las publicaciones que realizan los medios de comunicación local y nacional, luego de conocerse un hecho criminal y el grado de afectación que esto genera para el investigado.
- Proponer la incorporación de protocolos policiales y publicitarios que permitan garantizar el principio de presunción de inocencia del imputado antes de que se formalice la investigación.

1.4. La hipótesis

La confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación, afecta el principio de presunción de inocencia, por lo que se requerirá el control de dicha actividad.

1.5. Variables

1.5.1. La variable independiente

La no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación.

1.5.2. La variable dependiente

La afectación del principio de presunción de inocencia.

1.6. Los métodos de la investigación

Para el desarrollo de esta investigación se ha preferido el acercamiento a la realidad a través de métodos relacionados con el ámbito jurídico, así pues, se tiene en primer punto de consideración a los métodos de la interpretación de la regla, así pues, se tiene al método relacionado con la exégesis desde el punto de vista literal y luego la interpretación sistemática mediante la cual se corrobora la vinculación con el resto del ordenamiento jurídico.

De otro lado se han considerado dos métodos que se relacionan con la observación de la realidad desde dos perspectivas inversas, así se inicia con el método hipotético deductivo partiendo de la verificación de un aspecto general de la realidad para aterrizar sobre una determinación específica, la misma que da pie a la configuración del método inductivo para poder alcanzar una determinación general que se convierte en uno de los argumentos de la postura.

1.6.1. El método de la exégesis jurídica

Para la implementación de este método se ha tenido en consideración que el análisis se tenía que realizar sobre una regla que se concibe como el origen del problema, ello luego de la evaluación no sólo de la problemática, sino también de la recurrencia al material bibliográfico crítico sobre el tema en particular. En ese sentido el artículo 70 del ordenamiento jurídico procesal penal se ha convertido en el eje de la observación, así pues su contenido literal ha permitido reconocer un problema al momento de la consignación del sujeto sobre el cual se permite disponer de su derecho a la identidad; este es el imputado, que como tal según la literalidad de la regla tendría que ser un sujeto al cual se le haya reconocido

mediante ciertos medios probatorios la responsabilidad de un acto delictivo y en razón de lo cual se constituya la formalización de la investigación.

Todo este razonamiento es lo que ha conllevado a la comprensión de dicha regla como el origen del problema y sobre lo cual se hubo de realizar el análisis a fin de establecer los alcances de su aplicación, como es el caso de que tal permisibilidad otorgada a la Policía Nacional conlleva a que la identidad del sujeto que ha sido intervenido por esta institución, sea entregada a los medios de prensa; estos últimos son los que en el intento de realizar la transparente ejecución de la libertad de prensa terminan alterando el verdadero sentido del principio de presunción de inocencia.

1.6.2. El método de la interpretación sistemática jurídica

En base a la concepción del origen legislativo del problema, se ha utilizado este método de interpretación sistemática como una herramienta que conllevó al reconocimiento de la relación que tiene el artículo 70 del ordenamiento jurídico procesal penal, con el resto de las reglas que lo circundan. Dicho examen de manera obligatoria inició con la verificación del contenido esencial del principio de presunción de inocencia, así pues se ha observado que el legislador al momento de construir la regla, no ha tenido el cuidado especial de salvaguardar la protección del investigado al inicio de las actividades; ello permitió reconocer que la estructura de dicho artículo no se condice con el contenido establecido en la garantía constitucional de la presunción de inocencia, alterando además el sentido de la dignidad como base de todos sus derechos.

1.6.3. El método hipotético deductivo

Como bien se ha dicho al inicio de la explicación sobre el tipo de métodos empleados en esta investigación, se ha considerado apropiado hacer el examen de la realidad partiendo de un aspecto general, el cual se enfocó en la ejecución del derecho a la libertad de prensa que ostentan los medios de comunicación, ello como un elemento general del cual se ha podido desprender otros derechos que circundan a su alrededor como es el caso de los que le corresponden al investigado de acuerdo al nivel del proceso, que para este caso sería el más importante el de la presunción de inocencia.

Este elemento particular es el que se relaciona con una porción de la problemática, que ha permitido argumentar de manera adecuada el sentido de las determinaciones de esta investigación, así pues, se concreta la idea de que existen límites tanto procesales cuanto extraprocesales que conllevan a la protección más amplia de este derecho de inocencia, lo cual debe ser regulado de manera adecuada a fin de garantizar su correcta ejecución.

1.6.4. El método inductivo

Teniendo en cuenta las consideraciones antes plasmadas como el resultado de la deducción en el análisis de la realidad, aquí para la aplicación de este método se ubica una relación directa entre el aspecto particular que se ha determinado con el método anterior que es la protección de la presunción de inocencia, con el hecho de que existe un elemento particular que es la confidencialidad en el proceso penal, aspecto del cual se parte para el examen de este método. Siendo así, el resultado de

la observación dirige la atención hacia el hecho de que existen parámetros específicos planteados tanto normativa como legislativamente sobre el actuar de las instituciones que participan en la investigación; sin embargo, se ubica un elemento general que se convierte en el origen del problema, como lo es la estructura del artículo 70 del Código Procesal Penal. Así pues, tal reconocimiento general se ubica relacionado con el inicio del anterior método, lo cual conlleva a cerrar el círculo de la lógica que permite argumentar de manera concreta la necesidad de una reformulación o especificación en su construcción, como es el caso referido a la condición de imputado, con lo cual se limitaría la acción de publicidad sobre la noticia criminal, favoreciendo la protección de la identidad del investigado hasta alcanzar la condición de imputado.

CAPITULO II

LA TEORÍA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS DILIGENCIAS URGENTES E INAPLAZABLES

El desarrollo de este capítulo resulta de un importante carácter introductorio, toda vez que muestra el ámbito de estudio comprendido respecto a la teoría de la confidencialidad que se utiliza con el fin de establecer límites específicos en lo que corresponde a la información que se maneja desde la recepción de la noticia criminal por parte de la Policía Nacional y cuando esta es trasladada al conocimiento del Ministerio Público.

Recalcando la importancia, es menester indicar que el interés se basa en el derecho de la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano, sobre todo en la situación en que se encuentra en momentos como el descrito en el párrafo anterior, siendo así esta garantía deberá ser comprendida como una herramienta de control para la forma en que se ejecutan las acciones de diligenciamiento inicial de todo proceso de investigación por parte de los miembros de las fuerzas del orden así como en lo que corresponde a la participación de los medios de comunicación para el cumplimiento de sus fines.

Precisamente por la necesidad de ejercer control sobre la información que se maneja a este nivel en que la investigación aún no se inicia formalmente, ha de ser considerada como apropiada la intervención de los límites que se requieren a fin de garantizar la presunción de inocencia de los imputados, por lo mismo que sobre ese tema se ha considerado necesaria la incorporación de investigaciones académicas previas a esta, con el fin de conocer el estado del arte, entendiendo ello como el nivel de creación que se ha logrado alcanzar sobre el tema en particular.

2.1. Investigaciones precedentes sobre el tema

Teniendo en consideración el hecho de que las acciones que se desarrollan al momento de iniciar la intervención del Estado sobre hechos presuntamente criminales, debe tener un control no sólo por parte de la propia autoridad sino por la intervención de los límites que se establecen en la regla, así la comunicación que se ejerce en esta etapa serán tratadas bajo estricta confidencialidad, sobre ese aspecto en particular se encuentra lo señalado por el magíster López (2015) en su tesis para optar el grado académico de doctor en derecho y ciencias políticas, titulada *Publicación de fotografías y nombres de los investigados a través de los medios de comunicación (prensa) en la provincia de Ascope – la Libertad y vulneración del derecho a la presunción de inocencia*; investigación que aporta a nuestro planteamiento con la idea de un proceso carente de reglas apropiadas para resguardar ciertas garantías, así indica que: “(...) la legislación procesal penal no es efectiva ni suficiente para resguardar y garantizar el derecho a la presunción de inocencia, frente a las publicaciones de las fotografías y nombres de los detenidos o investigados mediante la prensa” (p. 88).

Queda clara la idea de que resulta insuficiente la protección de las garantías constitucionales dentro de un proceso penal que le son inherentes a toda persona; pero se ha de mencionar que hoy en día no solo en sede judicial se trasgreden dichas garantías. Siendo la Policía Nacional un elemento imprescindible en el organigrama del sistema penal, y con facultades en el control punitivo institucionalizado del Estado, se torna indispensable el trato directo con el detenido, es por ello que su actividad funcional se debe realizar con el respeto íntegro de los derechos humanos.

Es pilar primigenio dentro de su función, velar por el cumplimiento irrestricto de estos derechos superiores al Estado. Es en este punto, donde se cuestiona tal desempeño funcional, ya que existiría una posible violación del principio de presunción de inocencia

del detenido en sede policial, donde (en su rol de apoyo al Fiscal) más allá de detener a un implicado en hecho criminal, se genera una sobreexposición de la identidad del sujeto y que curiosamente los medios de comunicación tienen acceso inmediatamente a los datos personales de la persona implicada. Difunden la identidad del detenido generando un juicio social previo, sin escatimar que dicha identidad puede pertenecer a una persona inocente y que no tuvo que ver nada con el suceso criminal.

En pocas palabras no existe un criterio dentro nuestro ordenamiento jurídico que evite la confrontación entre el derecho a ser informado y la presunción de inocencia, pero hemos de advertir que posiblemente sean las mismas instituciones que aplican la ley y orden las que vulneran innecesariamente esta garantía, derecho y principio.

Así mismo dentro del ámbito internacional, encontramos estudios sustanciales, como el realizado por la bachiller López (2006) en su tesis previo a conferírsele el grado académico de licenciada en ciencias jurídicas y sociales, además los títulos de abogada y notaria, la cual se titula: *La violación al principio constitucional de presunción de inocencia por parte de la policía nacional civil, durante la captura de imputados por hechos ilícitos*; se considera este estudio por reflejar que el problema de la afectación de la presunción de inocencia por parte de la policía nacional (en este caso policía nacional civil), representa una realidad inmutable, que perdura y no ha llegado a una solución o consenso en la actualidad. Así, una de sus conclusiones que refleja dicha realidad es la siguiente: “A la fecha por parte de las instituciones encargadas de aplicar justicia penal (...) no se ha discutido el tema, que resuelva la violación del principio de presunción de inocencia, por parte de los medios de comunicación social”. (p. 67)

De la conclusión acotada, podemos advertir una realidad concreta de la situación que presenta la garantía de presunción de inocencia y de cierta manera este hecho posee

una relación directa con el tema de investigación que propongo; así primero tenemos el tema de que la afectación a la garantía de presunción de inocencia representa un problema evidente y que necesita de una coordinación conjunta para lograr una protección eficaz de la misma, pero sobre todo se evidencia que es un problema que a la fecha y a pesar de la notoriedad y esfuerzos, no logra una solución adecuada que permita un resguardo en el sentido estricto de su aplicación.

Más allá de necesitarse una coordinación entre las instituciones encargadas de aplicar la justicia penal, considero se necesita de un conjunto de lineamientos que obligue a que la protección de presunción de inocencia empiece desde el momento justo que la persona implicada en los hechos delictivos se encuentra bajo custodia de estas instituciones, las mismas que deben orientar su actuar a un cumplimiento únicamente de sus funciones y no ventilar información apresurada del implicado que permita crear una especie de juicios sociales previos a una declaración de culpabilidad como la ley exige.

Es por eso, que se pretende ir más allá de una simple coordinación entre instituciones y lograr a través de este proyecto de investigación, determinar si dichos lineamientos se trasgreden en esta fase de investigación policial, desde un punto vista penal garantista.

Por su parte, la bachiller López (2010) en la tesis desarrollada para alcanzar el grado de licenciada en ciencias jurídicas, bajo el título de: *“El respeto a la presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación social en el Salvador”*, aborda el tema de la protección de presunción de inocencia frente a la intromisión de los medios de comunicación. Asimismo, dentro de una de sus conclusiones podemos apreciar el proceso evolutivo la teoría del derecho penal para lograr la plena protección de esta garantía. Así, se tiene: “(...) el trato jurídico al incoado, al que se le ha imputado un hecho punible

antijurídico; de un trato extremo sin garantías a un sistema garantista donde no se rompe su estado original de inocencia sin cumplir ciertos presupuestos (...)" (p. 140)

La conclusión extraída, hace referencia en buena parte al proceso evolutivo del que ha sido objeto el derecho penal hasta llegar a una teoría penal que salvaguarda las garantías necesarias del imputado (por ejemplo la presunción de inocencia) como base fundamental para su aplicación; pero he de señalar que no concuerdo con la opinión vertida por la bachiller en su conclusión, pues puede que el derecho penal moderno en teoría haya adquirido una base más sólida de protección con las garantías inherentes del incoado, sin embargo actualmente podemos advertir, tanto en el ámbito nacional e internacional, como la presunción de inocencia, es vulnerada de forma continua, en la práctica y aplicación de la teoría penal moderna.

Por consiguiente, al menos en nuestra legislación o doctrina penal, no se encuentra especificado con claridad los límites que debe ofrecer un derecho penal garantista acorde a nuestros tiempos, y que permita no solo la protección de la garantía de presunción de inocencia, si no de los derechos que puedan lesionarse también al no proteger la garantía mencionada.

El presente trabajo de investigación no solo se orientará a analizar dichos parámetros sino además que dichos parámetros sean de estricto cumplimiento por los operadores e instituciones inmersas en la aplicación del derecho penal.

Para finalizar con la cita de antecedentes recogeremos la tesis de grado, previo a la obtención del título de magister en derecho penal y criminología del abogado Vásquez (2016) denominada: *"Garantía del estado de inocencia en el derecho penal ecuatoriano"*; quien desarrolla un contenido sucinto, versado en el carácter procesal y el derecho absoluto que esta implica. Así, podemos citar: "(...) que se les consideren inocentes mientras no haya resolución por parte de un juez o jueza competente, luego de

valorado los medios de prueba presentados por la fiscalía, que los declare responsables del hecho punible que se imputa”. (p.112)

La conclusión abordada como antecedente, refleja lo que por carácter lógico y legal representa la presunción de inocencia que posee todo detenido o imputado, y es que el punto medular de esta garantía radica en que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio público donde se valoren determinados elementos de convicción; realidad que es indiferente en la práctica diaria, donde se observa que no es necesario que la investigación supere siquiera las diligencias preliminares para que la sociedad se encargue de etiquetar como culpable al investigado, y es que como ya se mencionó anteriormente se requiere que la Fiscalía reúna pruebas necesarias e idóneas para que el juez previa valoración emita una sentencia.

Hemos de señalar que las Diligencias Preliminares, más aquellas las urgentes e inaplazables, están a cargo de la Fiscalía en coordinación y apoyo de la Policía Nacional, y es aquí donde el tema se torna preocupante, pues se tiene que tener en cuenta que el Fiscal se encuentra sometido al principio de Reserva de la investigación; por lo tanto se infiere que no tiene autorizado ventilar datos o detalles sobre el proceso y detenido, reserva que por lógica debería ser extendida también a la Policía Nacional como auxiliar en esta fase preliminar, pues es aquí donde principalmente se trasgrede esta garantía, siendo este el trasfondo al que se direcciona el trabajo a realizar.

2.2.La confidencialidad como teoría

La confidencialidad es uno de los principios fundamentales en el procedimiento de mediación, dado que propicia la confianza mutua de las partes y contribuye a garantizar la franqueza entre ellas y la sinceridad de las comunicaciones durante el procedimiento. La finalidad no es otra que generar la confianza necesaria para favorecer que las parte

expresen sus intereses y necesidades y, de este modo, que busquen, ellas mismas, la solución más razonada, mejor ajustada y conveniente a las circunstancias que concurran, sin temor a que sus palabras, documentos o informaciones vertidas sean utilizadas en su contra en otro medio de resolución de controversias, en general, un juicio posterior. (Viola Demestre , 2010, pág. 3)

En realidad, la confianza, más que un bien jurídico, puede ser considerada como una reacción frente a la existencia y conservación de aquellas condiciones que sirve al libre desarrollo de la persona. Si se aplica esta idea al ámbito de la informática, la confianza en el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos puede ser vista como una consecuencia del cumplimiento adecuado de las funciones de almacenamiento, tratamiento y transferencia de datos a través de sistemas informáticos. En ese sentido, más que proteger la confianza en el correcto funcionamiento de tales sistemas, de lo que se trata es de tutelar aquellos aspectos de la operatividad de los sistemas informáticos que resultan relevantes para el libre desarrollo del individuo en un Estado democrático de derecho. (Mayer Lux, 2017, pág. 10)

Todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo sólo realizar suministros o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. (Riascos Gómez, 2012, pág. 31)

Es el delito de acceso ilegítimo a un sistema informático. Se lo llama también intrusismo informático no autorizado o hacking, y supone vulnerar la confidencialidad de la información en sus dos aspectos: la exclusividad y la intimidad. Por lo demás, él constituye una modalidad propia de ilicitud informática, porque el tipo legal describe una conducta que sólo puede verificarse en relación con un sistema de tratamiento autorizado de datos o una representación de hechos, manifestaciones o conceptos en un formato que puede ser tratado por un sistema informático, lo que aparecen como objeto del delito. Precisamente, en el texto legal hace referencia a “sistema o datos informático de acceso restringido”. Éste es, entonces, el objeto material sobre el cual recae la conducta típica. (Arocena , 2012, pág. 27)

2.3. Investigación preparatoria del proceso penal

Después de haberse plasmado brevemente las cuestiones sobre el estudio del delito por parte del fiscal dentro de las Diligencias Preliminares, corresponde ahora analizar lo referido a la Investigación Preparatoria del Proceso Penal, lo que permitirá el alcance que tienen las actividades de investigación previa dentro de esta etapa; para ello tomaremos lo señalado por Neyra Flores (2010) quien dentro de su libro “Manual del Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral” manifiesta: “(...) en primer lugar, podemos encontrar a la etapa de investigación preparatoria cuya función principal es asegurar todo cuanto condujere a la comprobación de un hecho presuntamente ilícito (...)”. (p. 268)

En tal sentido, el autor señala en segundo lugar: “(...) a la identificación de quienes hayan participado, para que el órgano público de persecución penal pueda decidir

si formula acusación en contra de una determinada persona o solicita sobreseimiento, (...)” (p. 268)

De lo descrito podemos advertir, que la Formalización de la investigación preparatoria por parte del fiscal depende en gran medida de lo que a través de las diligencias preliminares puede haberse recabado y/o comprobado respecto del hecho delictivo y del implicado o implicados, por lo mismo es posible que a partir de esta etapa exista una certeza parcial de responsabilidad de los actos criminales que será comprobada a través de la etapa en estudio o desvirtuada con el sobreseimiento de la investigación como indica el autor citado.

Sin embargo, y como se ha venido explicando, las prematuras sindicaciones de responsabilidad y lapidación social de la que son objeto los implicados dependen en medida de la filtración y sobreexposición de información a la sociedad de lo que sucede dentro de las diligencias previas sin siquiera formalizarse la investigación preparatoria, y esto debido en parte a la palpable extralimitación de las funciones de apoyo de la Policía Nacional al Fiscal.

Dentro de lo descrito por lo tanto surgen algunas interrogantes, si nos encontramos dentro de un Derecho Penal Garantista moderno ¿Cómo es posible que se permita la vulneración la Presunción de Inocencia del implicado, exponiendo su identidad sin tenerse la certeza de que la investigación criminal puede prosperar o no?; así también ¿Cómo reincorporar a la sociedad al sujeto que se le sindicó como culpable ante la sociedad pero sin embargo no se le formaliza la investigación preparatoria por no encontrar elementos que indiquen responsabilidad criminal?, las respuestas a estas preguntas que me planteo, se desprenderán de una análisis más profundo respecto a esta etapa preliminar del proceso penal en el desarrollo de la tesis.

2.4.Diligencias Preliminares

Se considera prudente iniciar este apartado con la conceptualización jurídica de lo que implica el término “Diligencia” dentro de éste ámbito, para ello se toma la opinión vertida por Lilian C. San Martín (2012), quien en su libro denominado “La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño- Estudio histórico y Comparado”, nos dice: “(...) en el lenguaje técnico de los jurisconsultos como en aquel de los escritores literarios, la expresión “diligentia” fue empleada principalmente para designar la cuidadosa, atenta y previsora conducta de quien gestiona intereses ajenos y de quien debe cumplir una obligación”. (p. 66).

De lo descrito puede avizorarse que el término diligencia dentro del campo del derecho se refiere básicamente al actuar por parte de un funcionario público para cumplir una obligación de manera idónea cuando se gestiona o protege un interés ajeno como se deduce de la idea planteada por la autora; llevando esto al campo que nos importa, podríamos mencionar que es el Fiscal justamente el que se encarga de conducir lo que se denomina “Diligencias Preliminares” dentro del nuevo proceso Penal.

Angulo Arana (2008), menciona respecto a las Diligencias Preliminares como tal: “En el nuevo Código Procesal Penal peruano, los autores del mismo han diferenciado lo que denominan diligencias preliminares como un estadio previo a la denominada investigación preparatoria”. (p. 01). De lo dicho puede inferirse que las diligencias preliminares corresponden a aquellos actos previos y conducidos por el Fiscal para investigar los desencadenantes que originan la comisión de un delito.

Dentro de este aspecto y conforme a nuestro Código Procesal Penal (2017) en su Artículo 330° numeral 1 señala: “El fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de

investigación para determinar si debe formalizar la investigación Preparatoria (...)" (p. 482).

De lo acotado, y llevando esto a la práctica, se conoce que el Fiscal generalmente cuenta con la ayuda de la Policía Nacional para esta etapa de investigación, es aquí donde se desata el hilo conductor que comprende esta investigación, pues se supone que los efectivos policiales orientan su conducta a modo de apoyo al Fiscal para investigar y recabar elementos necesarios que determinen la existencia o no de un delito.

Sin embargo, también en la práctica se puede observar la extralimitación de funciones por parte de éste órgano de apoyo, pues los policías se encargan a través de cualquier mecanismo audiovisual de mostrar al sospechoso y ventilando información del caso en concreto, generando aquí una vulneración de las garantías personales y procesales sobre quien se investiga; en específico lo referente a vulneración de la presunción de inocencia, pues al no tener certeza de responsabilidad no se debe tratar como culpable a quién aún no se le ha considerado como tal, evitando así razonamientos equívocos y prematuros de culpabilidad.

Por lo tanto, cabe preguntarse ¿Qué medidas pueden adoptarse para asegurar la reserva de todo proceso? ¿Es necesario revelar la identidad del sospechoso y detalles del proceso sin formalizar la investigación preparatoria en sí?

2.5.La Reserva de las Diligencias Preliminares antes de la formalización de la investigación.

Con el desarrollo de este apartado teórico se pretende conocer dos aspectos; en primer lugar, lo concerniente al contenido y tratamiento propio de lo que representa la Investigación Preparatoria como etapa del nuevo proceso penal común; pues al

comprender dichos aspectos de esta etapa nos permitirá poder comprender su importancia y alcance, y como segundo aspecto; lo referido en específico a las Diligencias Preliminares; punto que nos ofrecerá una visualización más delimitada de lo que implican y comprenden estas actividades dentro de la Investigación Preparatoria como tal, además posiblemente también determinar las funciones y limitaciones de aquellos operadores que tienen a cargo su ejecución y apoyo .

Añadido a esto y como punto importante y esquemático de la investigación, se podrá analizar lo concerniente a la Reserva de la investigación que debe primar dentro de las Actuaciones Preliminares del Proceso Penal tomando énfasis en aquellas diligencias urgentes e inaplazables a cargo de la Policía Nacional.

Si bien someramente se ha revisado lo que referente a las Diligencias Preliminares y a la Investigación Preparatoria, es necesario y por importar al estudio delimitar lo que respecta la Reserva de las Diligencias Preliminares, y cómo ya se ha podido indicar líneas arriba este apartado representa punto importante y esquemático de la investigación, para ello a partir de la opinión de Miguel Rodríguez (2017), quien en su página web Derecho Procesal Penal y otros temas de derecho general, se explicará sobre este tema lo siguiente:

“La reserva de la investigación se tiene entendida como una limitación que impide que cualquier persona extraña al proceso pueda tomar conocimiento de él mientras se desarrolla la investigación”. (Rodríguez, 2017)

En este mismo párrafo el autor cita lo siguiente: “De acuerdo a lo establecido por el artículo 324.1 del Código Procesal Penal esta limitación se extiende inclusive a los sujetos procesales que aún no se han hecho parte del proceso”. (Rodríguez, 2017)

Si bien podemos inferir que la Reserva de la investigación se desprende del Código Penal, implica que este mandato adquiere un carácter imperativo inminente para

los que tienen a cargo la Investigación del hecho criminal, como lo es el Fiscal, además lo que supone se extiende también hacia los organismos de apoyo como lo es la Policía Nacional e incluso a las partes, fungiendo como una limitación dentro del proceso, tal y como indica el autor.

Pero conviene nuevamente revisar la práctica diaria del manejo de la Investigación Preliminar del delito dentro de un proceso penal común, pues la prensa y la sociedad tienen conocimiento pleno de lo que se desarrolla en el caso, sea un caso mediático o no, y en gran parte a la exposición que realiza sobre todo los efectivos de la Policía Nacional en apoyo al Fiscal.

Tal situación induce a preguntarse ¿Existe algún parámetro de actuación que faculte a los efectivos policiales a omitir tal disposición Legal de Reserva de la investigación?, se considera a modo de opinión que no se justifica tal accionar, es más se evidencia la falta de represión a tales comportamientos de extralimitación funcional de la Policía, lo que lleva a cuestionarse también ¿Si existe alguna medida disciplinaria que se esté omitiendo para sancionar la filtración innecesaria de información de la investigación de la investigación del delito?; una análisis y desarrollo con mayor envergadura permitirá responder a estas formulaciones.

En tal sentido el Dr. Angulo Arana, en su obra “La investigación preparatoria”, en torno a la medida que dispone el secreto de la investigación refiere que: “(...) Se advierte que tal decisión debe tener como motivo objetivo que el conocimiento de ello pueda poner en peligro el éxito de la investigación.” (p. 145)

De lo anteriormente expuesto, se tiene plena conformidad ya que como el mismo autor manifiesta, la reserva de las primeras diligencias que se disponen luego de conocerse el acto criminal son vitales para el éxito de las investigaciones.

La mínima contaminación del proceso penal, (presuntamente originado al inicio de este) podría generar en la población una imagen de desconfianza hacia la administración de justicia, y con ello incluso una desobediencia a la autoridad.

2.6. Actos urgentes e inaplazables

Se entiende que las diligencias preliminares son aquellos actos de investigación a cargo de la fiscalía, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto del delito, y a su vez garantizar los elementos materiales de su comisión, e individualizar a las personas involucradas. (Artículo 330.2. del Código Procesal Penal).

Es menester para el presente trabajo de investigación definir o abordar la conceptualización de los actos urgentes e inaplazables que son las diligencias que más convergen en nuestro planteamiento problemático.

De este modo, la Sala Penal Permanente, en la Casación 528-2018, Nacional, ha definido lo que debemos entender por actos urgentes e inaplazables: “(...) actuación pronta del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú, a fin de apersonarse al lugar de los hechos (...) o impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores o se altere la escena del hecho criminal (...)”. (p. 7)

Se hace necesario resaltar que estas actuaciones urgentes de carácter inaplazable, dispuestas por la Fiscalía y más de las veces llevadas a cabo por la Policía Nacional no pueden ser abusivas ni mucho menos arbitrarias. Su actuación se debe limitar al cumplimiento de su deber, respetando en primer lugar los derechos humanos, inherentes a toda persona, de la mano con aquellos amparados por nuestra constitución y Estado.

En paralelo, garantizar el pleno desarrollo de los diferentes actos procesales de la investigación, la reserva de estos y la permanencia de la presunción de inocencia de todo aquel sometido a un proceso de investigación.

La consideración del sujeto que constituye el foco de la investigación por parte del Código Procesal Penal peruano, es bastante simple al definir su condición; es decir, debería comprenderse que según el decurso del proceso la condición del sujeto investigado pasa por ciertos niveles que permiten hacer la diferenciación respecto a su tratamiento; así según lo señalado por el artículo 70 del dicho cuerpo legal, existe una apertura de posibilidad de informar a los medios de comunicación la identidad de los imputados.

A este nivel determinante, según lo que el Código Procesal Penal señala, puede ser informada la identidad, tanto de aquel sujeto que ha sido capturado por la Policía Nacional y se han generado estas diligencias urgentes de las que se habla en este acápite, así como de aquel que estuviera a puertas de la etapa de juzgamiento para la determinación de su responsabilidad; atendiendo a que la condición del primero en el nivel en que se encuentra aún carece de pruebas fehaciente para atribuirle responsabilidad.

Lo detallado permite establecer el riesgo, a falta de diferenciación, al que se somete la propia infidencia de la Policía Nacional sobre la identidad del sujeto investigado, puesto que conduciría a la vulneración de sus derechos individuales de manera innecesaria, al no demostrarse su condición de responsable.

Entonces, es importante, que a este nivel de la investigación la nominación del sujeto investigado, sólo se le considere como tal y no como un imputado, dada la connotación del término imputar, que significa atribuir responsabilidad en razón de pruebas contundentes que la demuestren.

Se advierte la ausencia de diferenciación descrita, de la lectura del artículo 71 del Código Procesal Penal, puesto que, al describir los derechos del imputado, hace mención a los momentos en que se puede ejercer esta facultad, partiendo desde “(...) las primeras

diligencias de investigación hasta la culminación del proceso”. (Código Procesal Penal, 1993)

Como se puede advertir, el propio ordenamiento jurídico nomina al sujeto investigado como imputado, lo cual al compararlo con la aplicación del artículo 70, permite verificar la evidente vulneración de los derechos de un sujeto sobre el cual no existe certeza de su responsabilidad, ergo del principio de presunción de inocencia respecto a su ámbito extraprocesal, dado que la apertura de información por parte de la Policía Nacional, conlleva a la intervención de terceros ajenos al proceso como son los medios de comunicación.

Por todo ello, resulta de mucho interés este argumento para afiatar la construcción de una propuesta que se oriente hacia la seguridad que debe otorgar el carácter garantista del proceso penal, a través de sus principios, como es el mencionado de presunción de inocencia, para lo cual deberá tomarse como primera acción la distinción de condiciones del sujeto que forma parte de la investigación en razón de los niveles que atraviesa en el proceso; valga decir que para esta etapa inicial en la que se realizan actos o diligencias urgente, no debería tener cabida la aplicación del artículo 70, dado que la débil certeza o más bien la sola presunción de responsabilidad puede variar antes de la propia acusación.

2.7. Crítica a las diligencias urgentes e inaplazables por parte de la Policía Nacional de Perú.

Finalmente, se concluye que la idónea dirección funcional exige una mejor preparación jurídica y manejo de técnicas de investigación por parte de fiscales y policías, así de esta manera se fortalecen las labores de investigación criminal de los delitos y de esta forma se evitan dar disposiciones para realizar diligencias o actos de investigación

que no sea necesarios o de mero trámite. Se debe tener en cuenta que la actividad de investigación de la fiscalía tiene su centro de gravedad en la investigación preliminar, cuya titularidad jurídica la ejerce el Ministerio Público, aunque la ejecución material corresponde a la Policía Nacional. (Jiménez Suárez, 2019, pág. 4)

Una vez que el fiscal recibe la noticia criminal o la denuncia de un acto ilícito, si el hecho reviste carácter delictuoso, tendrá que decidir el inicio de la investigación y dispondrá, por lo general, la realización de diligencias preliminares o pesquisas urgentes e inaplazables, e incluso podrá constituirse en el escenario del crimen para efectuar las comprobaciones ineludibles 8329, 330). Tratándose de ejercicio de la acción penal, él fiscal cuenta con varias alternativas: - declarar que no produce formalizar ni continuar la investigación porque el hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente o concurre una causa de extinción de la acción; -ordenar la intervención policial para identificar al autor o partícipe del hecho delictuoso; -reservar provisionalmente lo actuado por omisión de una condición de procedibilidad 8334); y – siempre que existan indicios reveladores de la existencia de un delito, emitir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, lo cual afirma que la acción no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, en su caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad (336). (Rodríguez Hurtado , 2010, pág. 13)

La investigación preliminar está a cargo del Ministerio Público, dentro del marco de los principios procesales y de los derechos humanos, siendo claro que la tarea preliminar al eventual ejercicio de la acción penal debe quedarse en manos del Ministerio público, como el órgano encargado de requerir ante el órgano jurisdiccional. Conforme el código procesal penal, actos iniciales de la investigación a través de una noticia criminal, está es por denuncia de parte o de oficio, siendo en práctica siempre a solicitud

del denunciante. La finalidad de las diligencias preliminares es realizar diligencias o actos urgentes e inaplazables que determinan si tuvo lugar o no los hechos delictuosos. (Arpasi Pacho, 2018, pág. 27)

“Durante el plazo de la investigación preliminar el Ministerio Público puede requerir al Juez de la Investigación Preparatoria, este encarcelamiento provisorio que será decidido sin efectuar ninguna diligencia solo verificando los actuados, si se satisfacen las siguientes: i) Que no haya aprehendido a la persona en laguna de las situaciones generadoras de flagrancia delictiva pero, se presentan motivos de los que se puede estimar que ésta ha realizado una conducta típica a la cual le corresponde una sanción que supera los 4 años de encarcelamiento y del contexto en que se ejecutó existe la posibilidad de que huya. Cuando la persona descubierta en flagrancia impide su aprehensión; ii) cuando el aprehendido huye del sitio en que cumple esta medida; iii) se fugare de un centro de detención preliminar. Plazo 72 horas 8art. 261 CPP)”. (Murriagui Cardenas, 2019, pág. 39)

2.8. La intromisión de los medios de comunicación en la información criminal en el Perú.

Queda entonces al descubierto, que el verdadero y real poder del sistema penal no es el represivo, que pasa a través de la agencia judicial, sino un poder más importante, como es el configurador, luego resulta inocente sostener que el auténtico poder penal se ejerce cuando se detiene, procesa y condena, lo cual se hace selectivamente, por el contrario el poder de control social formal se esmera en internalizar en los ciudadanos un orden vertical y una disciplina militarizante, tarea en la que contribuye decisivamente la actividad de los medios masivos de comunicación social. La segunda causa de la criminalidad según la criminología contemporánea es la existencia de estructuras

económicas, sociales, culturales y políticas desiguales, inicuas y excluyentes, las que generan la conflictividad entra las personas, a la que se suma la violencia , dando como resultado la criminalidad y la inseguridad, tanto a nivel estructural e institucional, cuando a nivel conductual y discursivo, de donde se desprende que no es cierto que ciudadanos belicosos y beligerantes hagan una sociedad conflictiva, sino por el contrario, son las estructuras conflictivas e intolerantes de una sociedad que producen ciudadanos problemáticos. (Ríos Patio, 2019, pág. 4)

En su formulación, el derecho a la privacidad se caracteriza por el rechazo de toda intromisión no consentida en la vida privada, sobre todo de los medios de comunicación, haciendo prevalecer las ideas de aislamiento y autonomía, especialmente en aspectos como la vida doméstica y las relaciones sexuales. Lo define como una fase del derecho que tiene cada persona sobre su seguridad personal, vale decir, que es una parte del derecho más comprensivo a una personalidad inviolada. Muchos años después, ya como juez de la Suprema Corte. Brandeis aportó mayores elementos para el perfeccionamiento del contenido de este derecho, a partir de su entroncamiento con la IV Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, e una interpretación extensiva de ésta, con motivo de su voto disidente en el caso *Olmstead vs. United States* (1928) donde busca fijar límites a la intromisión del gobierno en la vida privada. (Eguiguren Praeli, 1995, pág. 3)

Oponerse a su divulgación ilegítima, al ser los únicos capaces de disponer de la información íntima las personas que puedan verse vulneradas en cuanto a la difusión o intromisión de terceros en su información íntima son los que cuentan con legitimidad y capacidad para obrar para oponerse a una divulgación ilegítima o no autorizada, sin embargo en el ámbito penal existe una discusión, tanto que el bien jurídicamente protegido solo podía ser percibido en su vulneración por la persona directamente afectada,

pero si la vulneración a la intimidad es realizada a un menor de edad, incapaz o no es percibida directamente por la persona afectada, estaríamos ante un caso de impunidad. Describe Vásquez (2017): “Para la teoría jurídica tradicional, la intimidad ha sido considerada, junto con el honor y la propia imagen, como manifestaciones de los derechos de la personalidad; y en el sistema actual de derechos fundamentales, como expresiones del valor de la dignidad humana”. Disponer de información privilegiada, en tanto que solo puede ser dispuesta por el titular de esta, es la sustancia de la intimidad, este espacio no puede ser invalido por terceros. (p.122) (Muños Quispe, 2018, págs. 24-25)

El sujeto desposeído, a diferencia de las elites, no considera como una intromisión la presencia de los medios de comunicación en aquellas instancias que se constituyen en las de su mayor dolor. Por el contrario, intentan encontrar en ellos una vía hacia un lejano concepto de justicia del que solo tiene referencias. Esto no quiere decir que a los sectores populares se los deba alimentar de violencia y que la crónica roja deba ocupar los espacios estelares de los informativos. Sin embargo, no podemos cerrarnos a la lógica de quienes no ven ni leen sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio porque sencillamente no lo entienden. Allí un pendiente para todos los ejecutores del periodismo que no encuentran o no les interesa determinar la manera de aterrizar aquellos asuntos de la alta economía. La sociedad es violenta, la corrupción y la mala aplicación del poder están cargadas de violencia. (Cerbino , 2005, págs. 158-159)

CAPITULO III

LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES PARA LA ACCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO PENAL

Bajo la comprensión de lo que se refiere a las garantías constitucionales que se encuentran contenidas en la normativa nacional, debe asumirse la intervención del Estado con el fin de establecer medidas de control, como es el caso de las acciones que se desarrollan por parte de los medios de comunicación, que para el caso de esta investigación se ha de prestar mayor atención a lo referido al esquema del proceso penal, con el fin de reconocer su efectividad para garantizar el resguardo de la presunción de inocencia como la principal garantía que se ve atacada con la inadecuada intervención de los medios de comunicación durante la etapa previa al proceso penal.

3.1 Investigaciones previas sobre la garantía de presunción de inocencia

Se iniciará con los estudios que se han desarrollado dentro del ámbito nacional, así se toma en primer lugar la investigación realizada por las bachilleres Gonzales y Román (2015), en su tesis para optar el título de abogado denominada *“El respeto a la garantía constitucional de presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación social y la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo durante el periodo mayo-junio del año 2014”*; quienes en sus conclusiones aportan fundamentos que son de necesaria revisión para el presente proyecto.

Así de la tesis antes mencionada se ha tomado la siguiente conclusión que habla de los efectos que provoca el hecho de que su identidad sea revelada, considerándola como: “(...) una afectación innecesaria de sus derechos, siendo preciso considerar tanto

el daño que la información puede ocasionar como la proporcionalidad con la finalidad y contenido del ejercicio del derecho de información” (p. 195)

De la cita señalada previamente, se puede observar una relación existente entre lo planteado por los autores y el tema a investigar desde el punto de vista en el que se hace mención a una divulgación de la identidad del detenido, lo que podría considerarse como una no confidencialidad por parte de los encargados de custodiar e investigar los hechos delictivos y de los encargados de difundir dicha información; esta situación generalmente desencadena una controversia entre la libertad de información y la exposición del investigado, que eventualmente terminaría en una ponderación de derechos fundamentales.

Asimismo, podría deducirse que los autores consideran la finalidad, proporcionalidad y contenido de la información como una limitación que se debe tener en cuenta para justificar la exposición o no de la identidad de un implicado a la sociedad, fundamento que podría significar un criterio válido al que posiblemente la investigación se encamine. Y por último, se considera que los autores dejan abierta la posibilidad de poder determinar la extensión que implica el derecho de informar, pues no necesariamente toda información difundida se justifica ni contribuye a una finalidad disuasiva.

Para finalizar con las investigaciones nacionales se tomará la tesis desarrollada por el bachiller Izarra (2017) para optar el título profesional de abogado, denominada: *Permanencia de la presunción de inocencia del imputado en el proceso penal acusatorio garantista en la jurisdicción judicial Huancavelica – 2014*, en cuyas conclusiones se reflejan trabajados argumentos respecto a la importancia de la protección de la presunción de inocencia; de dichas conclusiones, se ha considerado extraer la siguiente: “Es permanente la presunción de inocencia del imputado en el proceso penal acusatorio

garantista en la jurisdicción judicial Huancavelica – 2014, como derecho fundamental a favor de todas las personas sometidas a un proceso jurisdiccional(...).” (p. 97)

En referencia a lo acotado por el Bachiller Izarra, se considera que constituye un argumento base, concordando con ello, pues el proceso penal está amparado por principios garantistas; esto es la representación de un debido proceso, una suficiente actividad probatoria, una adecuada contradicción y una sentencia proporcional a la lesión del bien jurídico o en ciertos casos una sentencia absolutoria.

Desde este punto de vista se tiene que la presunción de inocencia como principio y garantía constitucional es permanente como derecho fundamental de toda persona sometida a un proceso, hasta que no se dicte sentencia definitiva y cuya desvirtualización se manifieste por actividad probatoria de quien acusa (Ministerio Público). Sin estos alcances, las garantías que salvaguardan los derechos de la persona inmersa en un proceso penal solo serían parte de un lineamiento tácito de la teoría penal mal llamada garantista.

3.2 La presunción de inocencia como garantía

En sus orígenes, la inocencia se tomó como un estado de pureza absoluta; la lectura fue ideológica: se afirma que las personas al nacer llegan al mundo inocentes, y ese estado pervive en su existencia hasta la muerte. La aplicación en el proceso penal de esta idea se transmite con igual intensidad: sólo la sentencia judicial puede variar el estado de inocencia. Y por eso cuando el juez “absuelve”, declara y confirma dicho estado de inocencia; mientras que la “condena” es constitutiva, pues a partir de ello nace un estado jurídico nuevo. Luigi Lucchini señalará que la presunción de inocencia es un “corolario lógico del fin racional asignado al proceso” y la primera y fundamental garantía que el procesamiento asignado al proceso” y la “primera y fundamental garantía que el procesamiento asegura al ciudadano: presunción juris, como suele decirse, esto es, hasta

prueba en contrario”. Ferrajoli determina que la presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada que son “la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal” y “la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absoluta en caso de duda”. (Benavente Chorres, 2009)

La sociedad en busca de seguridad frente al crimen, así como la estigmatización social, ha invertido el fundamento del derecho a la presunción de inocencia. En la actualidad muchas veces el investigado y el acusado son quienes deben de probar su inocencia, vulnerándose así también su derecho al silencio. Es decir, la carga de la prueba se ha invertido, lo cual es contrario a los enunciados constitucionales. Por otro lado, es el imputado quien tendrá únicamente la carga de la argumentación de la duda razonable, es decir, la sustentación de que existe otra hipótesis razonable en su defensa que explique los hechos del caso. (Higa Silva , pág. 1)

La temática de las relaciones de tensión entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia, contrario a lo que se podría creer, no cesa de tener actualidad. Debe recordarse que las críticas a la presunción de inocencia lanzadas desde el positivismo criminológico, el fascismo, el nacionalismo, el comunismo soviético y el de sus satélites y el comunismo chino, correspondían a la pretensión de librar de ataduras el dictado de la prisión preventiva, lo que se justifica con base en el interés de la colectividad frente al delito, reclamando que la presunción de inocencia no era sino un exceso del individualismo y de la revolución francesa. Hoy día las argumentaciones en tal sentido se repiten en Latinoamérica y como solución a la inseguridad ciudadana que se presenta, se propone la extensión de la prisión preventiva, criticándose que los derechos humanos y entre ellos la presunción de inocencia, son protectores de los delincuentes y desconsideran

los derechos de las víctimas. Se pretende asignarle a la prisión preventiva la función de prevención general negativa, lo mismo que la de prevención especial negativa, de modo que da hecho delictivo se llegue a imponer la prisión preventiva como forma de penalización inmediata. (Llobet Rodríguez, 2009, págs. 1-2)

“Es justamente esta interpretación la que permite que la presunción de inocencia alcance doctrinalmente su valor constitucional innegable como garantía de acceso a la Justicia, que ya defendiera Ferrajoli, e íntimamente relacionada con la definición del Estado Constitución de Derecho. Se abre así la doctrina y la jurisprudencia española a la consideración de la presunción de inocencia como derecho al servicio del proceso equitativo o del juicio justo, actuando plenamente para asegurar que el proceso de enjuiciamiento, no solo penal, se produce de forma debida, con todas las garantías y que no se sufre sanción, ni afectación de los derechos personales, hasta que no recaiga sentencia judicial definitiva, con todo lo que esto implica. La presunción de inocencia despliega en plenitud su halo de protección como instrumento útil, por ejemplo, frente a la arbitrariedad judicial (STC 7/2005 de 17 de Enero) frente al abuso policial, o frente a los juicios mediáticos, actuando como garantía del honor y la propia imagen del ciudadano, como aval de la celebración de un juicio equitativo y como caución del juez imparcial”. (Ovejero Puente , 2017, pág. 3)

En ese sentido debe iniciarse la recopilación teórica por el reconocimiento del significado de la libertad, así pues, se ubica lo señalado por el investigador Desantes (1991), quien menciona en su artículo *De la Libertad de Expresión al Derecho a la Información*, que: “La libertad es un objeto del derecho humano, como la información (...). El hombre tiene derecho a la libertad. No a una libertad formal, sin sustancia, ni eficacia, artificiosa o convencional, semántica o hueca (...)” (pág. 39).

La descripción que se hace sobre las características de la libertad que le corresponde al ser humano, intentan referirse a la radicalidad de dicha concepción, toda vez que le corresponde al ser humano por su condición de tal, en tanto que resulta el único que puede asumir la responsabilidad de sus acciones tanto a nivel público, así como los que se desarrollan en el ámbito privado.

De acuerdo con el autor, se comprende a la libertad como una proyección sobre todo el ordenamiento jurídico toda vez que asume su aplicación en base y comparación con los derechos humanos, lo cual denota su universalidad, siendo así que el hombre es libre por naturaleza, pese a ello se requerirán de ciertas intromisiones de parte del Estado con el fin de regular su ejecución, lo cual se concibe como el equilibrio, pues pese a ser libre el ser humano, para desarrollarse en sociedad ha de requerir de ciertos parámetros o condiciones que cumplirá para el respeto de sus propios derechos.

Esta limitación se convierte en la base y el fundamento de la existencia de la libertad, puesto que se aplica como esencia a todos los derechos y permite su ejecución y respecto en base a sus propias restricciones, que aplicadas en conjunto permite el equilibrio y evita el abuso de derecho, lo cual genera un vínculo estrecho entre libertad y derecho.

En ese sentido ha de entenderse a la libertad de información como aquel ejercicio posible y libre para acceder y difundir la información haciendo uso de distintos medios, lo cual carece de limitación, entonces dicha libertad permite que el derecho se ejercite de manera individual o grupal.

3.3 La Libertades de Opinión, Expresión e Información frente al principio de presunción de inocencia.

A nivel internacional se puede observar que los ordenamientos jurídicos se han concentrado en plasmar derechos relacionados con la expresión, la opinión e información de formas diversas, los cuales coinciden en diversos aspectos, pero se diferencian en otros tantos, por lo que la regla jurídica es la que marca su posición de manera individual.

Los derechos de opinión, expresión e información son preponderantemente derechos de libertad y garantía de una comunicación libre, son derechos fundamentales que gozan por igual todos los ciudadanos, sin injerencia de los poderes públicos. El derecho de comunicar y recibir comunicación veraz y el derecho de recibir y comunicar ideas y opiniones son derechos de libertad frente al poder.

La libertad de expresión es el derecho a expresar y difundir ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones y la libertad de información actúa sobre hechos; son considerados como parte de la realización personal de los sujetos que resulta en la exteriorización de los juicios de valor que puede elaborar bajo el raciocinio que lo caracteriza, marcando su carácter individual entre el grupo que constituye la sociedad.

Respecto a la libertad de información se puede señalar que la protección que proporciona se ocupa de aquellos razonamientos o juicios de valor que se sostengan relacionados con el carácter trascendente, luego al ser que estos: “(...) carezcan de trascendencia, no sean veraces o se refieran a materias que no son objeto protegido por esta libertad no se protege ni la transmisión de los hechos ni los juicios de valor derivados de los mismos”. (Bustios, 1994, pág. 289)

La concepción de la libertad de expresión con el de expresión, están relacionadas en razón de su propia naturaleza, así pues el contenido de ambas está protegido por los ordenamientos constitucionales lo cual debe ser asumido en función a la obligación de que su legitimación deba hacerse: “(...) a partir de su definición y de su equilibrio y ponderación con otros bienes jurídicos, intereses y derechos subjetivos con los que se puedan entrar en conflicto atendiendo a las circunstancias de su ejercicio”. (Capodiferro, 2017, pág. 711)

Por lo señalado se puede establecer la presencia de límites, los cuales operan en razón de la existencia de derechos previos que forman parte de la estructura jurídica en tanto ordenamiento, los mismos que se inspiran en principios que para el caso estudiado se considera al de presunción de inocencia como aquel de utilidad para conseguir el resguardo de la información que corresponde a la construcción de las reglas que operan sobre la identidad y el tratamiento de datos informativos que corresponden al presunto imputado en el desarrollo de las actividades previas a la investigación, considerados como actos urgentes e inaplazables.

Límite que opera sobre la actividad de la prensa que, si bien es cierto tiene la libertad que le otorga el derecho a informar, deberá respetarse esta línea trazada por el principio estudiado, con lo cual no sólo se dota de garantía al sujeto investigado, sino que asegura una estructura garantista de todo el sistema, aspecto que debe mantenerse bajo la mirada vigilante del Estado y la sociedad misma.

CAPITULO IV

LÍMITES DEL DERECHO PENAL GARANTISTA RESPECTO AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La comprensión de los derechos su ámbito de aplicación y su origen, conducen al razonamiento de que existe una relación directa entre la existencia de las libertades y los límites que se manifiestan como herramientas de control para mantener la estructura equilibrada de las acciones en la sociedad, así pues, interesa comprender la manera en que se manifiesta la aplicación del principio de presunción de inocencia, sobre todo para ubicar posibles límites existentes a su propio ejercicio.

Sobre todo, la mirada se orientará hacia el proceso penal, que sin duda deviene de una estructura general con sus propios principios como lo es el derecho penal general, aquel tendrá a su vez principios propios como es el caso del principio de presunción de inocencia que deberá tratarse desde la perspectiva de los límites que operan sobre él, todo ello dentro del esquema garantista como concepción del derecho penal.

4.1.La Teoría del Derecho Penal Garantista

Se ha considerado necesario desarrollar lo concerniente a la Teoría del Derecho Penal Garantista, pues al adentrarse en su contenido doctrinario, permitirá vislumbrar la existencia o no de los límites que plantea la problemática de esta investigación; adicionalmente servirá para delimitar los preceptos que abarca esta teoría dentro del Derecho Penal moderno.

Se pretende llevar a cabo el estudio de esta teoría, partiendo de un devenir histórico que permita llegar a una concepción actual acorde a las exigencias garantistas

modernas; así también se abordará su alcance y contenido, enfatizando lo concerniente a la protección de derechos y garantías que deben ser de obligatoria observancia en el inicio de toda investigación policial y que son inherentes a los sujetos inmersos en un suceso delictivo.

Dicho esto, el desarrollo de este apartado, permitirá, tal vez, responder a la interrogante si el derecho penal garantista, protege estos derechos y garantías en todas y cada una de las etapas que determinan o no la responsabilidad del señalado como posible culpable.

4.2. Garantismo jurídico

Teniendo en cuenta la justificación del desarrollo de la teoría del Derecho Penal Garantista, se ha considerado prudente la recopilación de opiniones doctrinarias con el fin de establecer el concepto más adecuado para entender la línea de acción del garantismo que hoy caracteriza a nuestro proceso penal.

Así, ubicamos la definición que realiza la jurista española Dra. Marina Gascón Abellán (2001), quien en su artículo jurídico titulado: *La teoría general del garantismo a propósito de la obra de L. Ferrajoli “Derecho y Razón”*, en la que indica lo siguiente: “Garantizar significa afianzar, asegurar, proteger, defender, tutelar algo; y, cuando en la cultura jurídica se habla de garantismo, ese “algo” que se tutela son derechos o bienes individuales (...)”. (p. 195)

Partiendo de lo descrito se puede establecer el hecho de que la protección que otorga el Derecho Penal y su proceso deberán contener lineamientos de corte individual para asegurar el control del ejercicio del poder del Estado, que para este caso se traduce en la imposición del poder punitivo, lo cual tiene una base de acción que parte desde la fortaleza de la seguridad ciudadana, en tanto orden que debe resguardar el Estado, siendo

ello un aspecto colectivo, resulta imperiosa la verificación del cumplimiento del sentido protector también del criterio individual de los derechos.

Entonces en base a ello es que se asume que las acciones del Estado pueden llegar a constituir actos lesivos de tales derechos individuales, siendo importante diferenciar la acción del *ius puniendi* de los límites que se imponen para controlar dicha acción; siendo así, el fundamento de dicha restricción será la posibilidad de que el poder punitivo puede constituirse en lesión; así lo señala Gascón, se refiere al Derecho garantista como aquel que: “(...) establece instrumentos para la defensa de los derechos de los individuos frente a su eventual agresión por parte de otros individuos y (sobre todo) por parte del poder estatal (...)”. (p. 195)

Si bien se trata de una presunción de actos negativos que pueden ser generados por el Estado, se justifica la limitación en tanto que las reglas de protección estatal que parte de la concepción del ser humano como el eje de la construcción normativa en cuanto a la defensa de sus derechos, hace que se deba asegurar el cumplimiento o ejercicio de estos derechos de manera efectiva; por lo mismo que la cautela de ellos implica la verificación de posibilidades.

Este tipo de posibilidades se presume como una posibilidad como en el caso de la intervención del Estado, pero el mismo sentido de presunción opera sobre otro tipo de intervenciones, si bien es cierto que la protección antes mencionada opera sobre el *ius puniendi* del Estado, lo cual está a cargo del sistema judicial que lo opera; es de vital importancia también tener en cuenta el hecho de que las acciones de parte de los elementos de apoyo como es el caso de la Policía Nacional, también alcanzan este nivel de aseguramiento.

Es decir, que siendo su acción de apoyo para el inicio de la investigación ante la noticia criminal ya son considerados como parte de la acción que instaura el sistema

judicial, así pues se contemplan en el ordenamiento procesal penal peruano su participación como tal, por lo cual las prerrogativas de protección que son impuestas en dicho ordenamiento en tanto límites garantistas, también deben ser cumplidas por este cuerpo institucional a fin de asegurar la protección de los derechos individuales desde el inicio de la investigación.

Correlativamente, para afianzar el concepto del Derecho garantista, la misma autora, afirma que este: “(...) tiene lugar mediante el establecimiento de límites y vínculos al poder afín de maximizar la realización de esos derechos y de minimizar sus amenazas”. (p. 195); según lo señalado por Gascón, lo que debe comprenderse en primer lugar es el hecho de que existen como línea de protección, lo que se conoce como los límites, ello es aceptable en tanto se pueden reconocer en toda la estructura del propio ordenamiento normativo.

Tales límites se derivan del ordenamiento constitucional propiamente dicho, ello es así, bajo el entendido caso de que la Constitución hace que se deriven de ella todos los principios que permiten precisamente dicho control, lo cual le otorga ese carácter imperativo al garantismo jurídico que se reconoce en el sistema de justicia penal, que incluye al derecho penal y su proceso.

Según lo acotado por Gascón, se puede entender la finalidad del derecho garantista, apreciándose una concepción general, la cual incluye como característica principal la protección de los derechos de quienes se ven inmersos en circunstancias conflictivas que terminan vulnerando los derechos que como individuos parte de la sociedad les corresponde, siendo otro aspecto importante el hecho de indicar que tal protección se ejerce mediante ciertos mecanismos los cuales se basan en la aplicación de límites, que sin duda alguna se está refiriendo a los que cimientan la base de los principios que recoge la constitución del Estado.

Asimismo, para complementar la idea anterior, se recogerá lo planteado por el maestro Ferrajoli (2006) el cual en su obra titulada "*Garantismo Penal*", detalla que una de sus características: "(...) es la desconfianza hacia el poder público o privado, nacional o internacional (...)", a su vez que este: "(...)no se hace falsas ilusiones acerca de la existencia de *poderes buenos* (...) y prefiere verlos limitados siempre, sujetos a vínculos jurídicos que los acoten y que preserven los derechos subjetivos, sobre todo si tienen carácter de derechos fundamentales". (p. 4)

De ello se desprende que la acción del poder se asume como un riesgo, lo cual se entiende como una cuestión inherente desde los inicios, es precisamente dicho reconocimiento el que ha permitido el desarrollo de estructuras sociales y jurídicas a través de los tiempos con el fin de establecer un orden, por lo mismo que surge la democracia y el constitucionalismo como medio de alcanzarla en determinado orden jurídico como el peruano.

En ese sentido el garantismo jurídico tiene esta base que se orienta hacia el control del poder del Estado mediante ciertos mecanismos que limitan su acción, así la estructura jurídica se dota de la funcionalidad para poder administrar justicia de una forma más ordenada y convencional, ello en tanto que la inclusión de dicha estructura obedece a los lineamientos de los derechos humanos como base del ordenamiento convencional e inspiradora de las estructuras del derecho interno en estados como el peruano.

Cabe señalar que el mismo autor toma como referencia lo citado por Marina Gascón sobre la teoría general del garantismo: "(...) que del poder hay que esperar siempre un potencial abuso que es preciso neutralizar haciendo del derecho un sistema de garantías, de límites y vínculos al poder para la tutela de los derechos". (p. 4)

Ferrajoli, aborda al garantismo partiendo de una idea simple, pero con un contenido de relevancia constitucional en el sentido de que todo poder de control estatal, trae consigo una inobservancia, vulneración y abuso por quienes lo imparten, pero en su idea esa es la base y motivación del garantismo actual, pues esta corriente ha de actuar como límite y mecanismo de defensa para salvaguardar los derechos, garantías y necesidades de los que son objeto de punición.

Es justamente esa relación que ofrece el garantismo jurídico ante el poder de control estatal, que permite si bien, mantener la sociedad y las relaciones entre sus habitantes libre de conflictos, con un respeto mínimo y obligatorio de los preceptos constitucionales inherentes al ser humano, sin importar sea víctima o victimario; pero esto también nos obliga a preguntarse si el garantismo jurídico ¿es realmente un hecho perceptible en la práctica?, o tal vez ¿Cómo es que se pretende salvaguardar las garantías y derechos ante las evidentes extralimitaciones de los órganos y organismos de control? ¿Existen acaso preceptos ya establecidos?; estas interrogantes han de ser analizadas y contestadas con el desarrollo la investigación.

4.3. Derecho Penal Garantista

Habiéndose realizado una descripción previa de lo que representa el garantismo jurídico de manera global, queda ahora la tarea de estudiar el alcance de los preceptos ya mencionados pero trasladados al campo del Derecho Penal, pues es de aquí que se desprende la ya conocida Teoría del Derecho Penal Garantista, la cual, a grandes rasgos, podemos inferir conlleva la aplicación de todos aquellos lineamientos garantistas dentro de un proceso penal que ampare prioritariamente los derechos y garantías constitucionales de las partes .

Bustos Ramírez (1994) en su artículo "Principio Garantista del Derecho Penal y Proceso Penal", brinda un alcance de lo que representa el Derecho Penal Garantista, así se tiene: "Un entendimiento inverso del control penal (...) es decir, limitar las garantías sólo al Derecho Penal, se convierte esto en una simple metáfora o en el encubrimiento de formas pre-modernas a la intervención punitiva del Estado". (p. 112)

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Bustos agrega que: "(...) es necesario garantizar la intervención de la policía ya que esta constituye el primer filtro dentro de la intervención penal y que muchas veces esa intervención resulta más estigmatizadora que los restantes controles de carácter penal. Por eso destaca la importancia de todo el sistema de garantías dentro del sistema penitenciario y organismos auxiliares". (p. 112)

Resulta oportuno precisar la reflexión final de Bustos Ramírez: "(...) actualmente las garantías tienen que concebirse como garantías a todo el sistema penal, a la policía, a la administración de justicia, a los sistemas penitenciarios." (p. 112)

De la opinión acotada anteriormente, se puede entender que, la traslación de los criterios garantistas debe ser aplicado obligatoriamente al campo del Derecho Penal, no como una rama independiente, si no como una garantía penal que se distribuye y abarca cada extremo que comprende esta ciencia jurídica; por lo mismo, esto permitirá que la teoría garantista penal llegue incluso a aquellos organismos que contribuyen a la aplicación del control que ejerce el derecho penal como tal, ya lo decía Bustos, es necesario garantizar la intervención policial, por lo tanto, resulta lógico que estas directrices que aborda el derecho penal garantista, sean empleadas por la Policía Nacional en su accionar, pero esto también sirve para cuestionarse sobre ¿Qué sucede cuando los efectivos policiales se extralimitan en sus funciones y permiten la intromisión de los medios ventilando información reservada y generando juicios de culpabilidad anticipada

sin llegar a un proceso judicial?¿Dónde están entonces los lineamientos que establece el Derecho Penal Garantista?.

De lo dicho y a modo de complementación se puede tomar la opinión de Miguel Carbonel (2009), plasmada en su artículo virtual denominado “*¿Qué es el garantismo? Una nota muy breve*”, donde manifiesta y facilita una manera de cómo debe ser entendida la teoría garantista dentro del Derecho Penal; así se tiene que: “El garantismo en materia penal se corresponde con la noción de un derecho penal mínimo que intenta poner fuertes y rígidos límites a la actuación del poder punitivo del Estado. Esta vertiente del garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales (...)”. (Carbonell, 2009)

En palabras de Carbonel, la Teoría del Derecho Penal Garantista, debe garantizar también un proceso penal acorde a las exigencias mínimas y necesarias para el respeto de los derechos fundamentales de los intervinientes, es decir, aquellos derechos de la víctima y del acusado deben respetarse por igual sin diferenciación; pero conviene cuestionarse ¿El derecho Penal Garantista moderno protege adecuadamente cada etapa del nuevo proceso penal o solo aquella que se desarrolla netamente en ámbito judicial?, recordando que la etapa de Diligencias Preliminares se desarrolla principalmente sin la presencia de un Juez; por lo mismo ¿Existen lineamientos que se adecuen a cada etapa de acuerdo a su tipo de desarrollo?; esto debería poder ser comprobado con un desarrollo más extenso de lo que comprende el Derecho Penal Garantista.

4.4.Presunción de inocencia y garantismo

De acuerdo a la observación que se ha realizado durante el desarrollo de la investigación, queda clara la función del garantismo para asegurar el estricto cumplimiento o ejecución de los derechos individuales que le corresponden a las partes

de un proceso, por lo mismo que se deben tener en cuenta como límites a la acción del Estado en tanto apoderado del Ius Puniendi; siendo así corresponde referirse a la presunción de inocencia como un límite para conseguir tales fines.

Desde la perspectiva conceptual se parte del examen realizado por el investigador español Ferrer (2010) el cual ha considerado en su creación científica bajo el título de: “Una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia”, se refiere a dicho principio en la evaluación del derecho español, indicando que: “Que buena parte de las facetas que se atribuyen a ese derecho (extraprocesal, como principio informador y como regla probatoria) son superfluas y, por tanto podrían ser escindidas de la presunción de inocencia, disminuyendo la atrofia de ésta última”. (p. 23)

De conformidad a lo resuelto por el investigador citado, se puede comprender que existe un problema en la estructura o el contenido que se reconoce del principio de presunción de inocencia, por lo cual resulta de imperio el reconocimiento de los aspectos que conforman dichas condiciones, así pues se han de recordar que existen derechos relacionales con este principio, por ejemplo en lo que se refiere al carácter o faceta extraprocesal del mismo se puede advertir a los derechos individuales como la libertad, el honor y otros.

Sobre ello se aprecia en la doctrina la consideración de que: “(...) la relación que guarda el derecho a la presunción de inocencia con otros derechos constitucionales(...) específicamente con los derechos: a la libertad personal, al honor, a la propiedad y a un juicio previo”. (Benavente, 2009, p. 78); es de acuerdo a ello que se puede reconocer una relación directa con el carácter que se aprecia de los lineamientos del derecho a la información que se reconoce a los medios de comunicación, por lo que se puede asumir que existe este ámbito relacional entre el límite que se reconoce en el derecho penal y

procesal penal para que la presunción de inocencia también acuda ante la posible intervención inadecuada de los medios de comunicación.

De los derechos mencionados, se comprende como de mayor importancia o relacional con los derechos individuales que se pretenden asegurar respecto a la intervención de los medios de comunicación, al derecho al honor, que se debe comprender desde sus dos proyecciones, tanto la subjetiva como la objetiva; siendo la primera aquella que se comprende desde un carácter interno del propio sujeto, es decir su propia concepción como ser humano, lo que se puede reconocer como la autoconcepción que se manifiesta incluso sobre su autoestima.

De otro lado se debe traer a colación el aspecto objetivo que se refiere a la percepción que sobre determinado sujeto se tiene en la sociedad, así pues el establecimiento del derecho a la buena imagen, se contempla desde la perspectiva del contenido del principio de presunción de inocencia como elemento de garantía en el proceso penal, que según lo hasta ahora recogido, debe otorgarse protección en base a las reglas del garantismo; para cuya efectividad se advierte que aún no se han dejado en claro las formas de actuación de las mismas, toda vez que el resultado es ineficaz según lo que esta postura de investigación advierte del comportamiento de los medios de comunicación sobre la noticia criminal que se maneja en la etapa de actos urgentes en la primera fase del proceso de investigación.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Las publicaciones en los medios de comunicación local y nacional, sobre hechos criminales y el grado de afectación del investigado

Según la estructuración de esta tesis, teniendo en cuenta la base señalada en el proyecto de la investigación para el tipo de investigación no experimental, se ha optado por la observación de la realidad en base a lo que interesa como son las publicaciones periodísticas, esto es a través de los medios de comunicación.

4.1. Análisis de los resultados:

De acuerdo a lo estructurado en el desarrollo de esta investigación se ha tenido en consideración dos elementos que interesan para el reconocimiento de la realidad, como es el caso en primer lugar, de la revisión de comunicaciones periodísticas que se han concentrado en la consignación de la identidad de los investigados bajo la potestad otorgada a la Policía Nacional mediante el artículo 70 del Código Procesal Penal. Mientras en segundo lugar se ha recurrido a la opinión de los expertos a fin de poder validar los argumentos vertidos en esta investigación, lo cual se logró mediante la aplicación de una encuesta.

4.1.1. Resultados del análisis estadístico.

De acuerdo a lo marcado como la población del trabajo de investigación, interesa reconocer la realidad que se muestra respecto a la participación de la Policía Nacional en las actividades de investigación que se promueven en el Ministerio Público, ello desde luego se refiere a la primera parte o el contacto directo con la realización de las actividades criminales. Es en este contexto que se desarrollan la fase que interesa a la investigación, esto es las diligenciar urgentes e inaplazables.

Para tener un alcance de este tipo de acción o intervención de parte del cuerpo policial en el Perú, se ha recopilado la información plasmada en la página web institucional de la Policía Nacional del Perú, a fin de mostrar en cifras, la manera en que se desarrollan sus actividades, lo cual se aprecia en el siguiente cuadro:

Tipo de acción	Años							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Intervención	12252	14649	13550	15517	18870	17415	17566	15607

Fuente: (Policía Nacional del Perú, 2018)

Conforme se puede apreciar en el cuadro elaborado, la participación de la Policía Nacional tiene una carga bastante elevada en el desarrollo de la actividad investigativa, puesto que las intervenciones implican un primer punto de inicio que es el reconocimiento del presunto acto delictivo, es precisamente en este nivel donde se ejecutan las acciones urgentes e inaplazables que corresponden a su responsabilidad.

Siendo así corresponde también indicar que desde este nivel de acción, la Policía Nacional ya tiene en su poder la información que conducirá a la investigación sobre el presunto hecho y la sindicación del sujeto o sujetos en los que recae la persecución estatal, es por ello que a este nivel ya debe aplicar el criterio de confidencialidad como parte de la teoría que unida a la presunción de inocencia permite generar una garantía sólida para asegurar los intereses que se manejan en el proceso penal. Aspecto que se advierte restringido o vulnerado respecto a la ejecución tal cual se ha plasmado en el artículo que se refiere a la libertad de informar que se le otorga a la Policía Nacional respecto a la identidad de los sospechosos o aun cuando se tratara de flagrancia.

De otro lado, en función a la manera en que se desarrolla la investigación penal, se hace necesaria la verificación de la acción que desempeña el Ministerio Público a este nivel primigenio del reconocimiento de las actividades delictivas, por lo mismo que se debe tener en cuenta lo plasmado en el anuario estadístico de esta entidad pública a fin de poder reconocer la relación con la actividad policial.

Denuncias	Años					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cantidad	261523	275131	265808	191180	271811	98052

2015-2020

[Policiales](#) [Judiciales](#) [Local](#) [Dist](#)





Los amigos son investigados.

PNP interviene a dos presuntos “raqueteros” con arma de fuego

🕒 1 min read

Dos presuntos delincuentes, quienes operan en la modalidad de robo al paso, fueron detenidos por la Policía tras una persecución en el pueblo joven Las Mercedes del distrito de José Leonardo Ortiz.

Ellos son Jaime Jhoau Lobato Orozco (23) y Rigoberto Jesús Ampuero Salazar (49), quienes fueron intervenidos la tarde de ayer por agentes de la comisaría de Atusparia luego de haber asaltado y robado al comerciante Paúl Humberto Espejo Gamonal (28).

Dra. Katiuska



Tradiciones



Nuestra portada del día



Como se puede apreciar en la muestra que se ha recogido al azar de uno de los periódicos de mayor circulación popular como es el caso del diario “El Norteño”, la cualificación que se hace del sujeto que ha sido intervenido menciona la condición de presunto delincuente, no siendo ello el problema que se evidencia como una alteración del principio de presunción de inocencia, puesto que no se trata de un juicio o el

adelantamiento del mismo tal cual lo señala la constitución, que le correspondería al Poder Judicial.

Lo que se debe tener en cuenta de esta publicación es el hecho de que se haya consignado el nombre del sujeto hasta su edad, ello es lo que ataca de manera directa la dignidad que está incorporada dentro de los parámetros que sirven para asegurar al derecho a la identidad y las consecuencias derivadas de su alteración. Tal es el caso del hecho de la forma en que el resto de la sociedad aprecia a determinado sujeto, siendo así, la sola publicación de su nombre relacionándolo con la presunción de un delito sin tener la certeza de su comisión, aun cuando se tratara de flagrancia, vulnera la presunción de inocencia en la ruta descrita.



Policiales

Judiciales

Local

Distritos ▾

Nacional



Internacional

Deportes

Especiales ▾



El empresario intervenido fue trasladado a la comisaría de José Leonardo Ortiz.

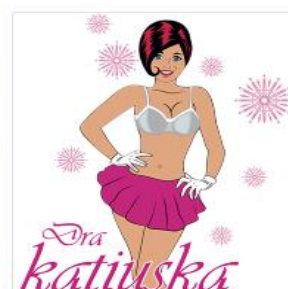
Empresario en estado de ebriedad portaba arma

1 min read

Un empresario fue detenido en el distrito de José Leonardo Ortiz cuando en aparente estado de ebriedad conducía su automóvil y para evitar ser intervenido golpeó a un efectivo policial; además portada un arma de fuego.

El detenido fue identificado como Javier Felipe Alache Chavesta (46), quien sería presunto autor de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad,

Dra. Katiuska



Tradiciones



Nuestra portada del día

Siguiendo la línea de publicaciones más populares que se desarrollan en el entorno Chiclayano, se aprecia esta otra publicación en la que puede observarse la descripción incluso de un tipo penal específico de parte de la prensa lo que puede entenderse según lo señalado por Zaffaroni como la Criminología Mediática, puesto que se atribuyen la potestad de hacer calificaciones sin contar con la capacidad o certificación que se precisa para evaluar un acto a fin de reconocerlo como delictivo.

Esta posición mediática es la que altera no sólo el principio de presunción de la inocencia, sino que vulnera la identidad en el ámbito del reconocimiento de la condición de un sujeto que atenta contra el orden público, sin conocer las verdaderas situaciones que pudieran haber orillado a este resultado final en el que la Policía ejecutó la potestad otorgada por el artículo 70 del ordenamiento procesal penal peruano al conceder el acceso a la identidad del mal llamado, a este nivel procesal, imputado.



Dos policías custodian a Juan Figueroa Salazar, Jazmín Díaz Salazar y Martín Coronel Coronado, quienes serán investigados entre rejas.

A la "cana" por asaltar a taxista

1 min read

Nueve meses de prisión preventiva dictaron contra tres investigados por el delito de robo agravado, en el grado de tentativa, en agravio de un joven taxista, ocurrido en la ciudad de Chiclayo.

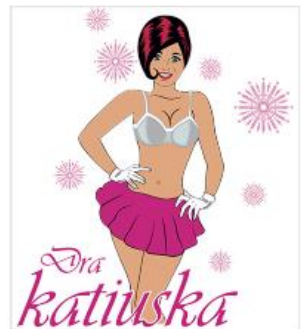
En audiencia, el fiscal Paolo Bazán Mezarina, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, la tarde de ayer, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria precisó que a Juan Ricardo Figueroa Salazar (22), Martín Coronel Coronado (18) y Jazmín Geraldine Díaz Salazar (19) se les acusa de los delitos de robo agravado, en el grado de tentativa.

Durante las diligencias se comprobó que los imputados actuaron con alevosía, utilizando un arma de fuego para atentar contra el patrimonio de forma dolosa, organizadamente en banda, en agravio del taxista Darwin Vásquez Díaz (22).

Además, se indicó que los imputados, mientras continúan las investigaciones, deben permanecer privados de su libertad debido a que existe peligro de fuga por no tener un domicilio procesal estable.

Como informó El Norteño, los hechos ocurrieron la tarde del pasado 11 de marzo luego que los tres imputados solicitaron una carrera de taxi al agraviado Darwin Vásquez y, durante el trayecto, Juan Ricardo Figueroa Díaz, provisto de un arma de fuego, amenazó al conductor con dispararle si se resistía al asalto y robo de su vehículo. Hecho ocurrido en la jurisdicción de la comisaría de Campodónico.

Dra. Katuska



Tradiciones



Nuestra portada del día



Tal cual se observa de la publicación que se ha tomado como muestra, la consignación de la identidad que se aprecia en el contenido de la nota de prensa, se advierte que se trata de un nivel distinto al del conocimiento primigenio de la noticia

criminal. Esta fase en la que se encuentran los sujetos sindicados corresponde a un nivel de percepción de certeza sobre la comisión de un delito, toda vez que para dictar la medida coercitiva de prisión preventiva hace falta cumplir con los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal, evaluación que ya los coloca en un nivel distinto al de las diligencias urgentes y necesarias sobre las cuales se ha realizado las críticas anteriores.

En ese sentido, se puede decir que la acción publicitaria de esta noticia estaría ajustada a la connotación del artículo 70 del Código Procesal Penal, puesto que la Policía Nacional ya estaría cediendo la información sobre la identidad de quienes se encuentran ya consignados como los imputados en un proceso penal. Es por esta diferenciación que se aprecia de las condiciones según el nivel del proceso o la investigación, que se hace necesaria una especificación del sentido que opera sobre la aplicación del artículo 70 del ordenamiento procesal penal peruano.

Este análisis permite verificar que la secuencia de información que se sigue partiendo de la data que proporciona la Policía Nacional, se origina en el criterio de permisibilidad que proyecta la aplicación del artículo 70 del Código Procesal Penal, toda vez que es posible proporcionar la identidad del imputado, carácter que se habrá de analizar en el aspecto crítico de la discusión sobre cuan apropiada es tal consignación desde el punto de vista de su concepto real dentro del esquema del proceso penal.

4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.

De acuerdo a la construcción de la tesis que se plantea bajo la modalidad no experimental, se ha tenido en cuenta el desarrollo de la validación de los expertos en el ámbito jurídico sobre las posturas que se han establecido en esta investigación. Para tal fin se desarrolló una encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, la misma que se compuso por un formulario de afirmaciones creadas en razón de las variables que inspiran la tesis.

Este formato fue trasladado a los especialistas a través de la plataforma virtual que permitió la interacción con estos individuos a fin de reconocer el nivel de aceptación de las propuestas, detalladas en afirmaciones tanto de concepto cuanto de crítica y finalmente de propuestas de solución al problema planteado en la tesis que se refiere a la vulneración del principio de confidencialidad en las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación, lo cual se entiende como la afectación al principio de presunción de inocencia.

De los resultados que se han obtenido de la aplicación de esta encuesta, se ha ocupado la tabulación que muestra los niveles de aceptación en función a las respuestas plasmadas, lo cual se graficó a través de los porcentajes obtenidos a fin de reconocer la validación que tuvo como fin esta fase de la tesis, lo cual se muestra a continuación.

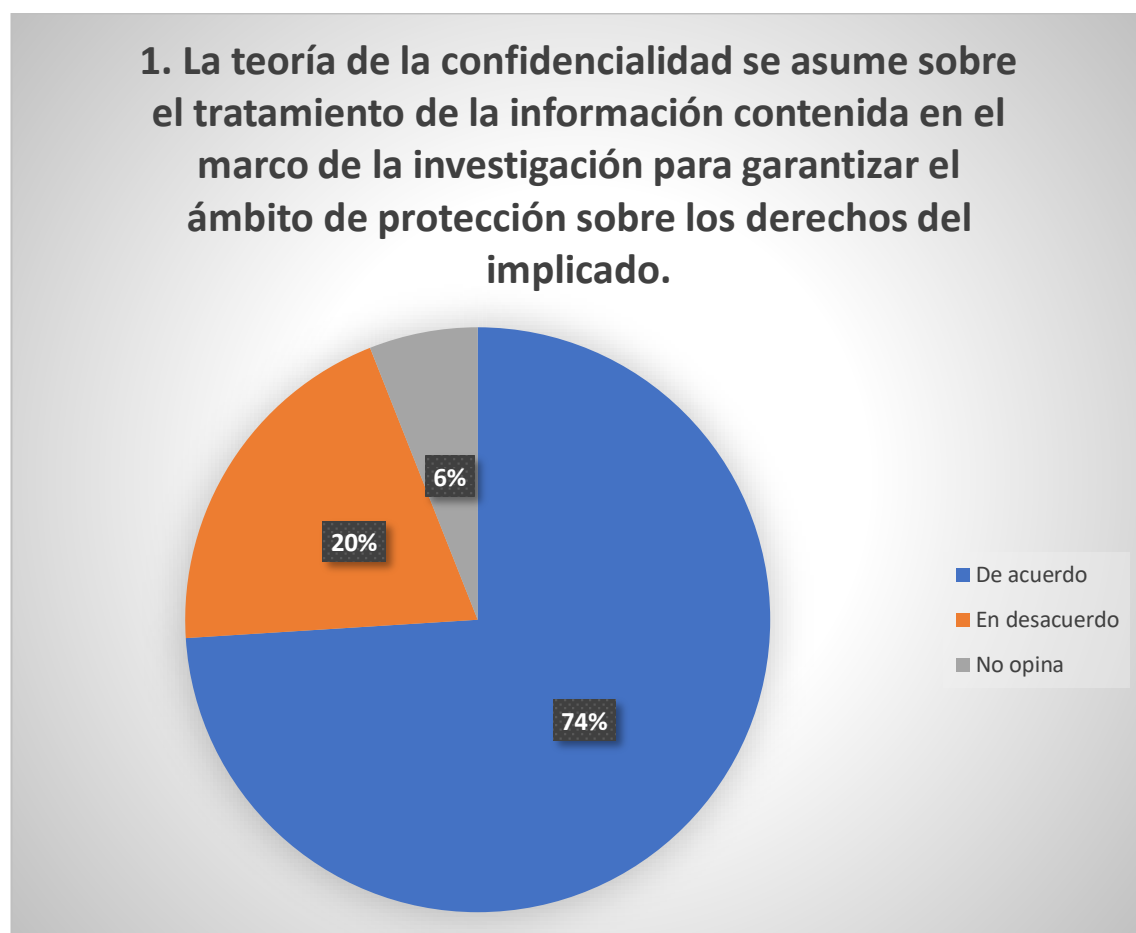
Tabla 1: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 1”.

1. La teoría de la confidencialidad se asume sobre el tratamiento de la información contenida en el marco de la investigación para garantizar el ámbito de protección sobre los derechos del implicado.

Opción	Respuestas
De acuerdo	37
En desacuerdo	10
No opina	03
Total	50

Lectura: tal cual se puede ver en la tabulación de los resultados respecto a la afirmación que señala: La teoría de la confidencialidad se asume sobre el tratamiento de la información contenida en el marco de la investigación para garantizar el ámbito de protección sobre los derechos del implicado; ante lo cual se puede apreciar que existen 37 operadores jurídicos encuestados, que indican estar conformes con la definición planteada, entre tanto que 10 de los participantes en la encuesta señalan no estar de acuerdo y solo 3 del total no ha opinado al respecto.

Ilustración 1: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 1”.



OBSERVACIÓN: Los resultados de las encuestas realizadas a los operadores jurídicos abogados y funcionarios jurisdiccionales, en primer lugar, arrojan la aceptación de la preposición planteada, es decir en su mayoría (con un 74%) considera que la teoría de la confidencialidad que manejan las instituciones públicas será el eje central para garantizar el exclusivo manejo de la información personal de una determinada persona, cuya garantía constará en la diligencia y el amparo penal que debe brindar el personal a cargo del tratamiento de estos datos.

El 20 % del porcentaje mostrado en desacuerdo considera que este tratamiento de datos ya se encuentra amparado por normas vigentes como la Ley de Protección de Datos Personales número 29733 o relativiza la importancia de este aspecto limitante que vendría a ser la teoría de la confidencialidad con la que se debe cumplir en toda institución pública con acceso a manejar datos personales para los trámites judiciales que ello implica, esto muestra el sector de la población jurídica que ha impulsado el actual tratamiento mediático de los presuntos imputados.

En función a ello, dado que el mayor porcentaje de operadores que se encuentran de acuerdo con la definición planteada que representa casi las $\frac{3}{4}$ partes del total, mediante lo cual se puede indicar como validada esta posición, que servirá de base para afianzar el planteamiento de la propuesta, toda vez que esta teoría implica el resguardo de la información básica hasta en tanto no se tenga la certeza de la responsabilidad, cuando menos ante una incoación o denuncia formal.

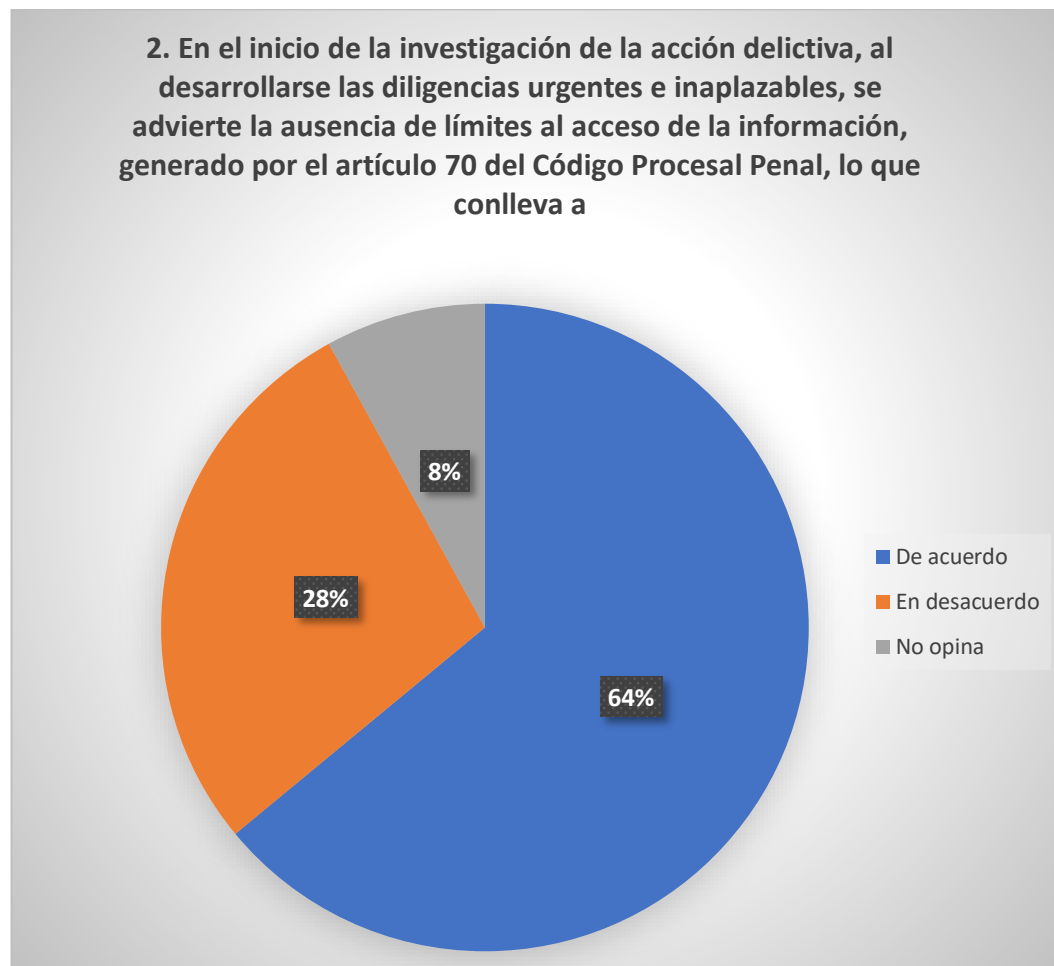
Tabla 2: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación”.

2. En el inicio de la investigación de la acción delictiva, al desarrollarse las diligencias urgentes e inaplazables, se advierte la ausencia de límites al acceso de la información, generado por el artículo 70 del Código Procesal Penal, lo que conlleva a la no confidencialidad.

Opción	Respuestas
De acuerdo	32
En desacuerdo	14
No opina	04
Total	50

Lectura: Según se puede apreciar de la lectura de la tabulación de los resultado, es posible ubicar sobre la afirmación: En el inicio de la investigación de la acción delictiva, al desarrollarse las diligencias urgentes e inaplazables, se advierte la ausencia de límites al acceso de la información, generado por el artículo 70 del Código Procesal Penal, lo que conlleva a la no confidencialidad; que 32 de los expertos encuestados, han tenido la posición favorable en su opinión sobre la crítica realizada respecto al desarrollo de las diligencias urgentes e inaplazables, mientras que 14 de los que han respondido la encuesta han sido negativos en su respuesta y solo 4 no han opinado.

Ilustración 2: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 2”.



OBSERVACIÓN: se puede reconocer en el gráfico elaborado de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta a los operadores jurídicos que la postura crítica se valida en función al 64% obtenido de los operadores que están de acuerdo en que se presenta este orden de no confidencialidad, se trata entonces de una validación en razón de la vulneración de un derecho que pese a la condición de investigado o imputado como lo señala el código le corresponde como ser humano que es. El tratamiento que se percibe en el desarrollo de las diligencias urgentes e inaplazables permite calificarla como una actuación sin las medidas de seguridad necesarias, lo que conlleva al ámbito de ausencia

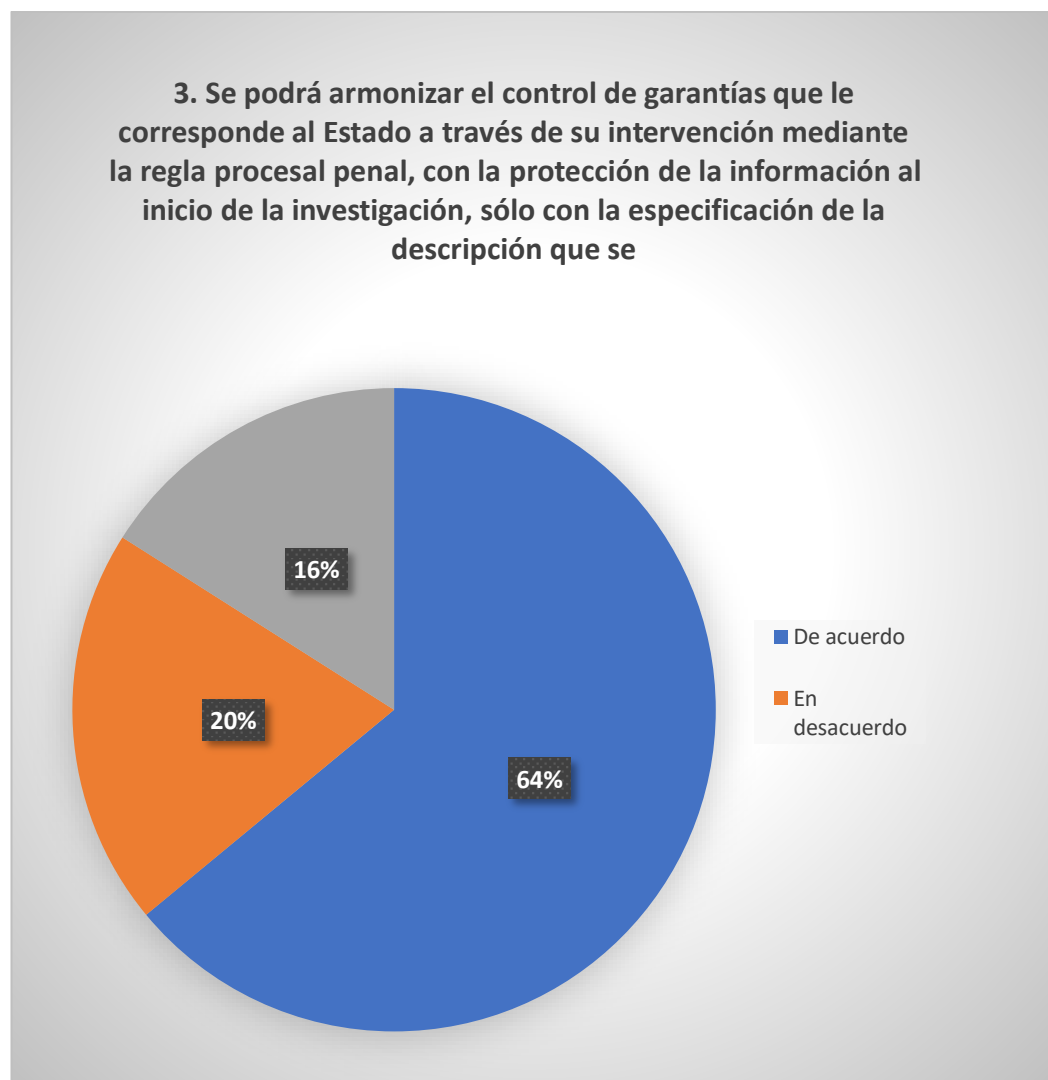
de garantismo, este sentido tiene que ver con el problema de la publicidad que se hace respecto a las comisiones delictivas como noticia de primera mano, esto es cuando se ha concebido como noticia criminal que debiera ser de manejo exclusivo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional a fin de salvaguardar los elementos más esenciales de protección de quien según la normativa constitucional tiene asegurada la garantía del principio de presunción de inocencia hasta antes de que se emita la sentencia firme que lo catalogue de una manera distinta.

Tabla 3: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 3”.

3. Se podrá armonizar el control de garantías que le corresponde al Estado a través de su intervención mediante la regla procesal penal, con la protección de la información al inicio de la investigación, sólo con la especificación de la descripción que se hace en el artículo 70 respecto a la libertad de brindar información sobre la identidad del imputado.	
Opción	Respuestas
De acuerdo	32
En desacuerdo	10
No opina	08
Total	50

Lectura: De acuerdo a lo señalado en el cuadro de tabulación se puede apreciar sobre la afirmación: Se podrá armonizar el control de garantías que le corresponde al Estado a través de su intervención mediante la regla procesal penal, con la protección de la información al inicio de la investigación, sólo con la especificación de la descripción que se hace en el artículo 70 respecto a la libertad de brindar información sobre la identidad del imputado; que se han presentado 32 operadores jurídicos como expertos en el área que asumen una posición favorable sobre la propuesta planteada para que se respete la identidad del imputado en ciertos niveles de la investigación,

Ilustración 3: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 3”.



OBSERVACIÓN: de acuerdo al resultado gráfico, se puede apreciar una posición favorable sobre el planteamiento de la tesis, que se refiere a la necesidad de hacer un tipo de especificación sobre el contenido inicial del artículo 70 del Código Procesal Penal. Esta condición deberá asumirse sobre el hecho de la calificación que se requiere para que un determinado sujeto pueda ser considerado como imputado; puesto que lo que se observa en la realidad es la libertad de parte de la Policía Nacional para transmitir o mostrar como dice la regla, la identidad del imputado.

Atendiendo al aspecto que permite considerar como imputado a un sujeto, sólo en tanto exista una acusación formal hasta llegar al nivel del reconocimiento de su

responsabilidad sobre el delito que se le imputa, esto debe comprenderse como aquella labor que sólo le compete al juzgador. En la realidad se puede observar que las sindicaciones realizadas por los medios de prensa en razón de la información brindada por la Policía Nacional, representa un problema social que repercute en el ámbito jurídico al evadir la condición de confidencialidad que debe operar en la fase de las diligencias urgentes e inaplazables; situación que traslada sus efectos sobre la garantía que se presume debe operar en función al principio de presunción de inocencia.

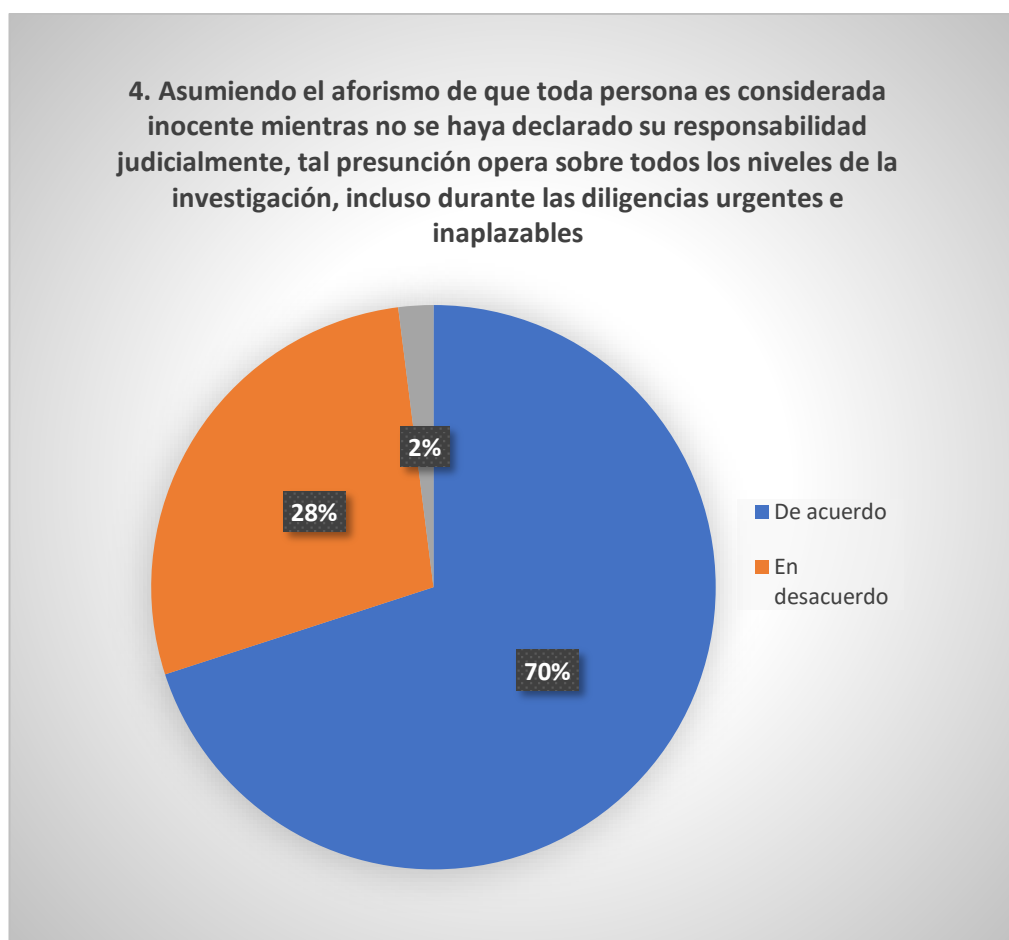
Es precisamente sobre este razonamiento que se proyecta la propuesta de una suerte de especificación respecto a la libertad de brindar información sobre la identidad del imputado, con el fin de limitarla para evitar el injusto jurídico que se advierte. Es por ello que se puede reconocer el nivel de validación de los expertos como adecuado dado que se representa a través de un 64% de la población encuestada.

Tabla 4: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 4”.

4. Asumiendo el aforismo de que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad judicialmente, tal presunción opera sobre todos los niveles de la investigación, incluso durante las diligencias urgentes e inaplazables y el correspondiente ámbito extraprocesal.

Opción	Respuestas
De acuerdo	35
En desacuerdo	14
No opina	01
Total	50

Ilustración 4: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 4”.



OBSERVACIÓN: el contenido de la definición que se plantea en esta afirmación planteada como parte de la encuesta, permite reconocer dos aspectos importantes, el primero que se traduce en la comprensión del principio de presunción de inocencia, en tanto que sus efectos son generales y se limitan a la intervención judicial que declare formalmente una situación distinta del individuo.

De otro lado se reconoce la conexión con dicho principio, a la extensión de sus efectos hacia un ámbito extraprocesal, lo cual quiere decir la incorporación de elementos partícipes o relacionados con el proceso, que pueden llegar a generar algún tipo de afectación sobre el esquema de la investigación. Esto ha de comprenderse como la influencia que se ejerce por parte de los medios de comunicación, puesto que a través de sus publicaciones se maneja el sentido que adopta la opinión pública, puesto que se

comporta como un indicador, que para el caso estudiado está relacionado con la seguridad ciudadana.

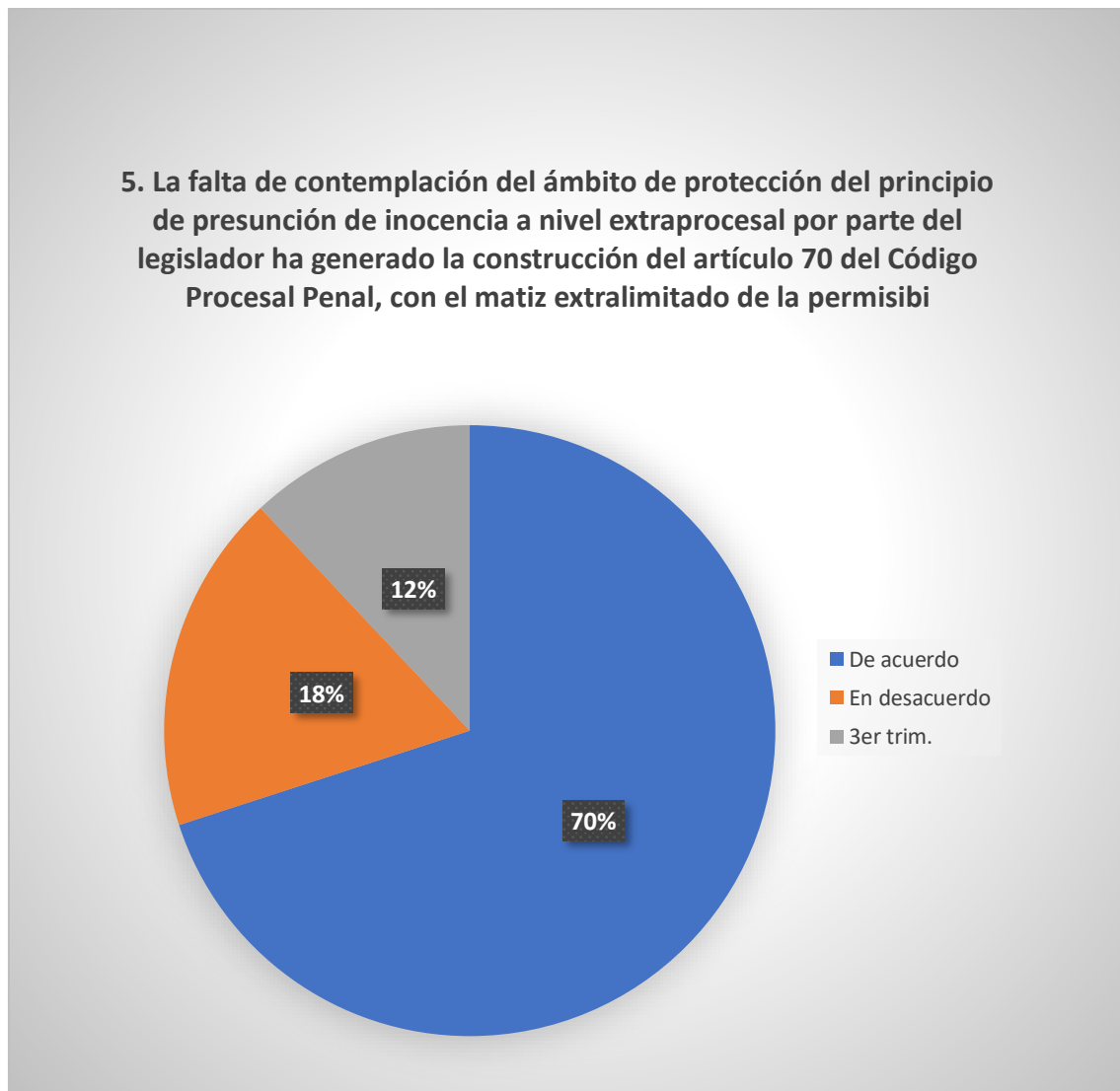
Entonces, la definición planteada, invita a razonar sobre un efecto directo de la garantía que ofrece el principio de presunción de inocencia incluso sobre un espacio específico que no corresponde al esquema penal contenido en el ordenamiento procesal peruano, toda vez que se tratará de las acciones que relacionan a la Policía Nacional y los medios de prensa. Esto se convierte en el argumento base de la propuesta que se orienta a la necesidad de reforzar la protección garantista respecto al principio de presunción de inocencia, con la indicación de los límites para el ejercicio de cada una de sus funciones poniendo por encima de ellos a la condición especial y primigenia del ser humano como tal, toda vez que el ordenamiento constitucional se erige sobre un eje antropocentrista, esto es se debe a la protección del hombre.

Tabla 5: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 5”.

5. La falta de contemplación del ámbito de protección del principio de presunción de inocencia a nivel extrapenal por parte del legislador ha generado la construcción del artículo 70 del Código Procesal Penal, con el matiz extralimitado de la permisibilidad para brindar información.

Opción	Respuestas
De acuerdo	35
En desacuerdo	09
No opina	06
Total	50

Ilustración 5: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 5”.



OBSERVACIÓN: la crítica plasmada en esta afirmación conlleva a la idea de un problema previo al planteamiento problemático plasmado en esta investigación, puesto que hace referencia a la falta de conocimiento que muestran los legisladores respecto a la realidad social y jurídica que representa el ámbito de la incidencia delincuencia. Esta condición es la que no permite una relación directa entre la estructura de las leyes que se han creado y las necesidades jurídicas a contemplar, como es el caso de la garantía del principio de presunción de inocencia que precisa de ser un elemento que asegure la

principal característica del derecho penal garantista que se hereda de la estructura normativa constitucional.

Tal desconocimiento de la realidad, para el caso de la estructura del artículo 70 del Código Procesal, implica ausencia del garantismo que debe otorgarse en el proceso desde incluso las primeras diligencias como es el caso de las urgentes e inaplazables que realiza la Policía Nacional, institución que en el nuevo esquema procesal forma parte de la estructura de la investigación, por ende, son pasibles del control estatal que se ejerce a través del garantismo en mención.

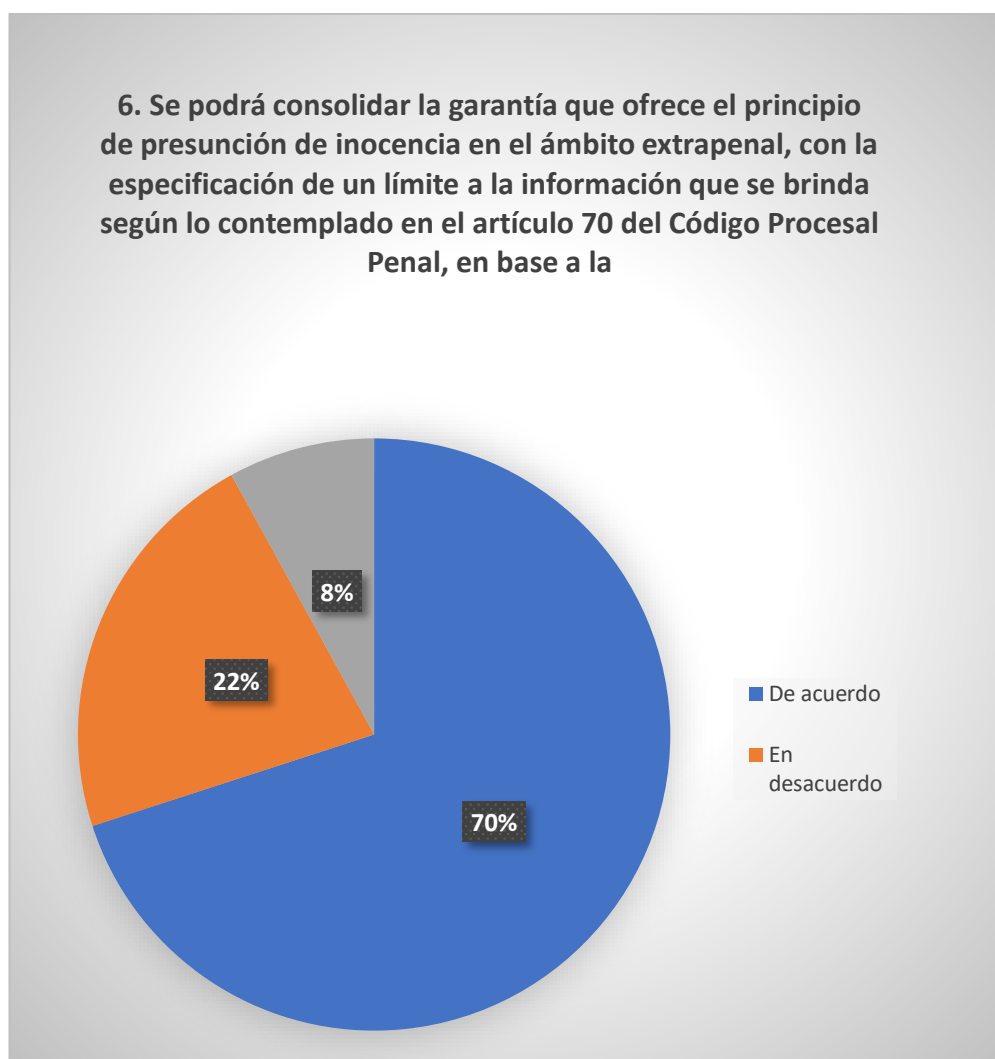
Por esta razón resulta válida la crítica respecto a la construcción que extralimita las funciones de la Policía Nacional trayendo como consecuencia la alteración del principio de presunción de inocencia al informar sobre la identidad del “imputado”, lo cual es refrendado por los expertos encuestados que señalan en un 70% estar de acuerdo con dicha postura.

Tabla 6: “Resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 6”.

6. Se podrá consolidar la garantía que ofrece el principio de presunción de inocencia en el ámbito extrapenal, con la especificación de un límite a la información que se brinda según lo contemplado en el artículo 70 del Código Procesal Penal, en base a la teoría de la confidencialidad que le asiste al proceso, para ser respetado por la Policía Nacional y los medios de comunicación con los que se vincula.

Opción	Respuestas
De acuerdo	35
En desacuerdo	11
No opina	04
Total	50

Ilustración 6: “Graficación porcentual del resultado tabulado de la encuesta aplicada a los operadores jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo en el ámbito penal, respecto a la afirmación 6”.



OBSERVACIÓN: De acuerdo a lo señalado por el planteamiento final de esta encuesta, en el que se plasma la síntesis conceptual de aquello que se reconoce como la solución del problema descrito en relación a las afectaciones o vulneración que pudieran estar sufriendo los investigados en el primer momento del proceso penal, esto es cuando se tiene conocimiento de la noticia criminal.

Es en este espacio donde se tiene como actores de la función persecutoria del ius puniendi del Estado a la Policía Nacional y al Ministerio Público, a quienes les corresponde cumplir con los principios que contempla el proceso penal, aun cuando la investigación no se haya formalizado, toda vez que existe un espacio delimitado como

extra e intra penal. Es así que se incorpora en la problemática descrita, la participación del principio procesal de confidencialidad, el mismo que se supone debe estar derivado hacia una especificación puntual respecto a la posibilidad de brindar la información correspondiente a las partes procesales, ello atendiendo a que según el principio de igualdad ante la ley impulsa la atención de ambas partes respecto a la tal protección sobre el manejo confidencial de los datos.

Esta forma de tratamiento no se aprecia de manera clara en la construcción del artículo 70 del Código Procesal Penal, puesto que hace una diferencia entre la protección de los datos que corresponden al imputado y a la víctima del delito, desde luego ante ciertos casos particulares; pero, esta diferenciación no se ajusta a las razones que deberían permitir superar la igualdad ante la ley, además de que el nivel procesal en el que se encuentra el sujeto sindicado como presunto autor de un delito, le otorga la condición de inocente bajo la garantía constitucional del principio que permite presumir tal estado hasta cuando exista una sentencia firme que declare su responsabilidad.

Así las cosas, lo que se aprecia del efecto aplicativo de este artículo procesal en el que se genera permisibilidad a la Policía Nacional para brindar la información sobre la identidad de los sujetos que resultan sospechosos o aún cuando se tratara de una cuestión de flagrancia, permite que los medios de comunicación puedan tener acceso a tales datos que son manejados sin un criterio adecuado respecto a la acción de los principios procesales, sobre todo el de la confidencialidad y los general como el de presunción de inocencia.

Desde luego según lo que se ha visto respecto a la función de la actividad de comunicación en tanto libertad para los medios y derecho de parte de la sociedad, no sería posible establecer un control específico respecto a estos niveles de acceso o posibilidad de la información, desde la perspectiva del derecho; menos aún se podría sancionar la

posible extralimitación de parte de los medios de comunicación, si no se tiene el interés del Estado para tal acción, puesto que ello significaría una grave alteración de la libertad de expresión.

Ante tal dificultad, que se muestra en este trabajo, sobre dicho control de la confidencialidad vulnerada en la investigación penal, sólo se puede atender con una solución que se ocupe de la génesis del problema, esto es la permisibilidad que genera toda esta compleja alteración del derecho a la presunción de inocencia que le corresponde a todo sujeto de derecho; para tal efecto sólo podría lograrse esta condición si se genera una especificación puntual en el artículo 70 del Código Procesal Penal, el mismo que tendrá que centrarse en la limitación de este tipo de datos a fin de propiciar el cumplimiento del principio de confidencialidad y en consecuencia eliminar la posibilidad de que la prensa coadyuve a la vulneración de la presunción de inocencia.

CAPÍTULO VI

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Este nivel de la investigación viene a ser el espacio donde se sintetizan todos los resultados que se han obtenido a través del desarrollo de la tesis, así pues, el contenido teórico que se ha obtenido a través de las fuentes se discute para luego llevar tales resultados hacia la construcción de la observación de la realidad a fin de complementar el argumento que permite indicar como sugerencia un cambio en la normatividad como es el caso del artículo 70 del Código Procesal Penal. Tales resultados se vuelven a sintetizar a través de las posturas adoptadas y agrupadas según las variables y su estructura, con lo cual se ha podido construir una determinación final que se compara con la hipótesis inicial dando cabida a la verdadera contrastación.

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Conforme se ha indicado al inicio de este capítulo, la creación de los elementos que componen esta investigación basados en las metas planteadas como son los objetivos específicos, han permitido crear contenido en la investigación el cual se somete a la crítica mediante la discusión de cada uno de esos puntos; así se han obtenido las tomas de postura que conllevan a la identificación de la secuencia de argumentos que conllevan a la hipótesis final.

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la teoría de la confidencialidad de la información que sirve de guía a las instituciones públicas, respecto del estado criminal de las personas durante las diligencias urgentes e inaplazables, a cargo de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación”

Del recojo de antecedentes sobre la investigación, se debe considerar como aspecto de crítica aquellos que no corresponde de forma directa con el planteamiento de

esta tesis, por lo mismo que se toma en consideración la tesis de López (2015) titulada “Publicación de fotografías y nombres de los investigados a través de los medios de comunicación (prensa) en la provincia de Ascope – la Libertad y vulneración del derecho a la presunción de inocencia”, cuya determinación se relaciona con el tema proyectado en razón de que se ocupa de la ineficacia de la presunción de inocencia como límite al ejercicio del poder, lo que implica la obligación del Estado para acudir con la normatividad necesaria a fin de conseguir la garantía de los derechos que se exponen en un proceso de investigación; lo cual deriva su alcance hasta un ámbito extraprocesal.

Es precisamente es ámbito extraprocesal el que debe reconocerse en esta investigación basado en el antecedente nacional que se ocupa de las publicaciones realizadas por los medios de comunicación, a fin de ampliar el conocimiento de los límites que operan en función al principio de presunción de inocencia.

Seguidamente se ha tenido en cuenta a nivel internacional la tesis desarrollada por López (2006) “La violación al principio constitucional de presunción de inocencia por parte de la policía nacional civil, durante la captura de imputados por hechos ilícitos”; en la cual se llega a determinar que la incorrecta acción de parte de esta institución trae como consecuencia un efecto de vulneración de los derechos de quienes son investigados por presuntos hechos ilícitos, realizada por los medios de comunicación.

Interesa por ello lanzar la crítica sobre una cuestión aclaratoria de cómo es que se produce este efecto, importante por ello es tener en cuenta su determinación sobre el comportamiento despreocupado de parte de los responsables de generar la seguridad jurídica, que se presume debe otorgar el proceso penal a través del garantismo que lo caracteriza; llámese con ello a la idea de que, sería necesaria la ampliación de las reglas que se ocupan no sólo del proceso, sino también de la estructura legislativa que cubre la

acción tanto de la policía y de los medios de comunicación, respecto a los derechos individuales que le corresponden al sujeto investigado.

Otro aspecto que resulta criticable de la construcción del enfoque de la tesis citada como antecedente, es el hecho de nominar como imputado al sujeto que sufre la vulneración de sus derechos, toda vez que la condición de imputado sólo la puede atribuir el Estado a través del órgano de poder que maneja el Ius Puniendi, lo cual debería estar condicionado en la intervención previa a esta circunstancia; elemento que bien podría usarse para la construcción de las reglas que dirigen la acción interventora tanto de la policía cuanto de los medios de comunicación.

¿Cuál es el argumento base de la teoría de la confidencialidad para que se incorpore como elemento de control en el proceso penal?

En lo que corresponde a la principal característica del Derecho Penal o más bien de todo el ordenamiento jurídico que se ocupa del control del Estado a través del Ius Puniendi, es el garantismo una herramienta fundamental, dado que se busca comprender como base de toda la estructura jurídica a la vinculación y respeto de los derechos fundamentales de las partes que intervienen en los procedimientos judiciales.

Es por ello mismo que se tienen en consideración la aplicación de este tipo de control garantista también en lo que corresponde a la secuencia procesal que se generó en la construcción del proceso penal; por lo mismo la verificación de las actividades que se desarrollan desde el inicio del procedimiento, implica como punto de partida la noticia

criminal que se supone debe ser comunicada por la Policía Nacional, en tanto la reciba a las instancias correspondientes del Ministerio Público.

Es precisamente en este nivel que interesa criticar el sentido que asume el tratamiento del procesado, ello en razón de que se trata de la verificación de la responsabilidad que pudiera tener frente a determinada acción que se le irroga; esto es que la forma de proteger su identidad debiera tener, a este nivel de inicio, las condiciones de reserva necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los principios que se contemplan en la estructura garantista que supone el proceso penal.

Sobre este aspecto se ha tratado de controlar básicamente el manejo de la información en razón de la confidencialidad como teoría más importante que sirve de base para la incorporación de las reglas que permitan su control, así pues se reconocen en el artículo 70 del Código Procesal Penal en el que se detalla los límites respecto a la confidencialidad, marcando uno bastante rígido sobre el otorgamiento de información de identidad que le corresponde a la víctima en el proceso, dejando en libertad a la Policía Nacional de poder proporcionar la información no sólo de la identidad del imputado, sino también en lo que corresponde al criterio adelantado de la presunta comisión de la acción delictiva.

En definitiva, la forma en que se ha estructurado el contenido del artículo en mención, se verifica un problema de ausencia teórica respecto a la confidencialidad que supone el desarrollo de la investigación, dado que la situación del inculcado aún cuando se trate de circunstancias flagrantes, requiere de la atención del derecho que le corresponde a ser tratado como ser humano, lo cual implica el respeto de su dignidad como base de la contemplación garantista del proceso penal.

¿Qué relación existe entre el concepto de confidencialidad, la reserva de la investigación en el proceso y el secreto de la investigación?

Habida cuenta de que, según la crítica desarrollada sobre la intervención de la teoría de la confidencialidad en el proceso penal, con el fin de entender la forma en que ha sido recogida, debe ser descrita bajo la estructura de generalidad que se le ha otorgado en la doctrina, así pues, se entiende que la confidencialidad como teoría, incorpora hasta dos ámbitos de protección para asegurar la ejecución de los derechos fundamentales relacionados con la dignidad de la persona.

Así pues, la publicidad que se genere respecto a la apertura del contenido o la data que se produce en función a la investigación partiendo desde la noticia criminal, debe tener los límites necesarios a fin de evitar en primer lugar la distorsión de la realidad y en segundo lugar asegurar el correcto desarrollo de la investigación evitando la intromisión que provoque alteraciones a través de la información filtrada; en ese sentido, el primero de los aspectos será tenido en cuenta como el contenido que funciona bajo el criterio de reserva de la información, en tanto que el segundo aspecto será el que se comprenda como el secreto de la información.

Cada uno de los aspectos mencionados deberá tenerse en cuenta bajo el propio criterio de quien tenga a su cargo la etapa, fase o momento de la investigación a fin de asegurar el sentido garantista que devine del derecho penal general así como de la propia Constitución, ello con la intención de provocar un verdadero cumplimiento de las garantías que le corresponden al sujeto, sobre todo en la etapa que interesa a esta investigación que desde el momento de la noticia criminal y durante las diligencias urgentes.

Según lo descrito, la crítica corresponderá a la forma en que se utilizan cada uno de estos criterios en la construcción de la estructura procesal, así pues teniendo en cuenta que la teoría de la confidencialidad abarca una comprensión amplia que incorpora a la reserva y el secreto de la investigación (información), estas dos últimas funcionan como reglas procesales, esto es son de aplicación en razón de los requerimientos por parte de las instituciones a fin de asegurar los contenidos y evitar la contaminación o distorsión del proceso; aspecto distinto es aquel contemplado en una etapa que no tiene todas las características del proceso penal en sí, esto es la etapa de las diligencias urgentes.

Es por ello que desde el conocimiento de la noticia criminal hasta que se ha logrado la convicción y elementos necesarios para construir la teoría del caso que conlleve a la acusación por la parte del Fiscal, se desarrollan actividades que no tienen una connotación procesal propiamente dicha, dado que no están regulados los parámetros específicos que orienten a su desarrollo, sólo se establecen plazos y signos de coordinación con la Policía Nacional y otras entidades institucionales; tal vez por ello es que no se ha logrado controlar la actividad que pueda llevar a la eficacia de esta etapa procesal, que si bien es cierto forma parte de una crítica distinta a la de esta tesis pero resulta importante reseñar.

Por lo antes indicado, la realidad del control de estas actividades son bastante ligeras, tan es así que se aprecia de la antes mencionada construcción del artículo 70 en el que se establece un límite parcial al otorgamiento de la información respecto a las partes que intervienen en la investigación, no cubre de manera total la garantía que supone debe ofrecer el proceso penal, dado que libera la opción a que los datos de identidad del “imputado” puedan ser otorgados por la Policía Nacional.

De ello se reconoce el hecho de que la única opción que se tiene de brindar tal información será a los medios de información, convirtiéndose estos en un enlace entre la opinión pública y el desarrollo del proceso penal en sí, situación que, de no ser correctamente utilizada por estos medios, puede llegar a distorsionar la realidad exagerando los niveles de responsabilidad que aún la investigación a través de las instituciones que se ocupan de ello, no lo ha establecido aún.

Esto último es lo que constituye el riesgo extra procesal que se percibe en esta investigación como la forma en que se está contraviniendo la teoría de la confidencialidad del proceso y en consecuencia alterando el garantismo que le corresponde, vulnerando el principio de presunción de inocencia desde su perspectiva extra proceso, que de hecho resguarda el accionar de los medios de prensa que tienen acceso a la data que es proporcionada por la Policía Nacional.

¿Qué relación existe entre la estructura del protocolo policial y la aplicación del artículo 70 del Código Penal?

La existencia de los protocolos institucionales tienen como objetivo marcar la dirección de la actividad que se desarrolla en determinado procedimiento, tal es el caso de las diligencias urgentes; su base normativa resulta ser de manera necesaria la Constitución Política, que establece la acción de control del orden público; luego el Código Procesal Penal tiene la misma base normativa lo cual le permite estructurar el proceso, específicamente las diligencias urgentes para que la Policía Nacional sirva de apoyo en dicho momento, ambas regulaciones se apoyan en el derecho convencional como inspiración *ut supra*; luego, esta connotación invita al razonamiento de la existencia del vínculo entre el protocolo y la aplicación del artículo 70 del Código Penal, lo cual

significa que la influencia de este último acomoda la actuación para generar la libertad de brindar la información del agente que se investiga por la comisión de un delito.

TOMA DE POSTURA:

En este capítulo, se puede apreciar que le urge al Estado hacer visible un ambiente de seguridad jurídica eficiente, donde la presunción de inocencia marque verdaderamente un límite constitucional al accionar del Ius Puniendi y donde aquel principio logre su alcance extraprocesal para salvaguardar con ello, los derechos fundamentales de las personas inmersas, a su vez, en un proceso penal.

El control punitivo que ejerce el Estado, a través del garantismo penal constituye una herramienta esencial que sirve de argumento base para la teoría de la confidencialidad. Es esta teoría de la confidencialidad la que garantiza que toda aquella información recopilada del estado criminal y otros datos personales, que manejan las instituciones públicas, serán protegidos y no podrán ser divulgados sin consentimiento expreso.

Por ello que, del estudio de tal realidad, permite reconocer un problema que parte de la ausencia de control constitucional sobre los efectos que surgen al aplicar la regla contenida en el artículo 70 del Código Procesal Penal, por lo mismo que resulta viable la revisión doctrinaria de otros límites en este contexto normativo para conseguir un argumento sólido para la propuesta que coadyuve a una verdadera protección garantista.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Recopilar la doctrina sobre los límites constitucionales que operan sobre la acción de los medios de comunicación y su relación con el derecho penal”.

Teniendo en cuenta que el origen proteccionista del derecho penal surge de la construcción constitucional en base a principios, los mismos que se heredan en su proceso con el fin de reconocer la responsabilidad respecto de los sujetos que son investigados por dichas acciones; del mismo modo la intervención de los medios de comunicación obedece en su acción a ciertos principios que permiten divulgar la información pero bajo el condicionamiento de otros principios que restringen los márgenes de dichos datos, entre los cuales se encuentra el de presunción de inocencia en su relación con el derecho penal.

¿Cómo operan los límites constitucionales sobre la acción de los medios de comunicación?

Partiendo de la configuración del ordenamiento constitucional que incorpora como su eje de protección al ser humano, a fin de garantizar su bienestar a través de la creación de derechos, entendidos como libertades para su acción en la sociedad, así como la inserción de límites que se traducen en diversas ocasiones como los deberes que le corresponden tanto al propio ser humano, cuanto al propio Estado en su organización y a la sociedad en pleno; de lo cual se recoge la tendencia de formular un espacio normativo que propenda al equilibrio.

Tal consideración que pone en un plano de protección al ser humano, preponderando sus intereses más trascendentes frente a los que no se relacionan directamente con la garantía de su dignidad y la propia vida, a fin de evitar la vulneración que altere dicho equilibrio; tan es así que los derechos garantizados mediante la

protección de la dignidad, siempre deberán superar a las intervenciones que ocasionen los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a lo señalado, se advierte que la existencia de la libertad de información que se traduce en el derecho a informar y ser informado, otorga facultades a los medios de comunicación para desarrollar sus actividades en el marco de la legalidad y con ajuste a los principios que garantizan los derechos de las personas, lo cual exige que los contenidos que se trasladen a la opinión pública mediante las comunicaciones de estos medios, deberá tener el cuidado necesario de no alterar la preponderancia que caracteriza a la dignidad de los seres humanos.

Entonces la realidad que se aprecia es un problema de construcción y pseudo libertades auto impuestas por el propio sistema de información, lo cual trae como consecuencia una seria vulneración de las garantías que se presume otorga el sistema penal constitucional, labor que corresponde al Estado controlar de manera apropiada, requiriendo para ello la construcción de estrategias que permitan esclarecer los límites tanto para el ámbito periodístico cuanto para el sistema de justicia que incluye a la judicatura y la Policía Nacional.

TOMA DE POSTURA:

Los límites constitucionales para el accionar de los medios de comunicación y su relación con el derecho penal implican uno de los ejes que sustentan el problema real de la investigación, es por ello que ha recaído en el especial cuidado la revisión del contenido constitucional que opera sobre cada uno de ellos para contrastarlo con el que corresponde a la estructura del proceso penal; revisión de la cual se advierte que la existencia de parámetros sólo controla la acción con el término general relacionado con la dignidad del

ser humano; lo cual no alcanza a cuestiones específicas para determinar la existencia de vulneraciones explícitas.

La cuestión puntual de este tipo de vulneración requiere que la propia estructura consolide la garantía del respeto por la dignidad de la persona independientemente de su condición procesal penal, para lo cual la limitación se traslada como labor esencial del principio de presunción de inocencia, al cual según parece no se ha prestado atención para liberar la posibilidad de acceder a la información sobre la identidad del imputado en una investigación, por ello, revisar la dogmática que permita validar el concepto de límite por dignidad sobre la regla que autoriza la acción policial, permite el reconocimiento de la necesidad de propiciar la acción de dicho límite sobre la intervención de los medios de comunicación.

Conforme se ha indicado, a manera de explicación se debe señalar que, el análisis dogmático permitió que se reconozca la ausencia de control constitucional en la regla del artículo 70 del Código Procesal Penal, puesto que sale del límite que plantea el principio de presunción de inocencia en base a la dignidad humana, elemento que trae como consecuencia una liberación de las acciones de los medios de comunicación para tomar dicha información y darle un tratamiento sensacionalista que termina por vulnerar la garantía constitucional que protege la inocencia de cada sujeto; justificándose por ello la contemplación del ámbito de protección extra procesal de dicho principio.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar los límites que establece el derecho penal garantista respecto al principio de presunción de inocencia”.

Atendiendo al carácter garantista del Derecho Penal, se debe reconocer la función que opera sobre cada una de las figuras e instituciones jurídicas que lo componen, tal es el caso de la aplicación de estos sobre los elementos que estructuran su proceso; tan es así, que la concepción del principio de presunción de inocencia se advierte desde la fuente constitucional, cuya garantía se traslada hacia la legislación penal y procesal penal, siendo esta última la que llama la atención respecto a la implicancia sobre tal garantía.

La observación del problema de esta tesis se dirige a la ausencia de un control adecuado respecto a la intervención de los medios de comunicación que se basa en la información proporcionada por la Policía Nacional, lo cual obedece a la configuración legislativa que se ubica en el artículo 70 del Código Procesal Penal, el mismo que genera libertad para proporcionar data respecto a la condición del imputado durante la investigación, lo cual se reconoce directamente como la identidad de estos sujetos.

Ante esta realidad son de aplicación directa los límites que corresponden al principio de presunción de inocencia, atendiendo al hecho de que su contenido implica dos niveles de acción, el primero que se plantea sobre la garantía general que obedece a la configuración constitucional y que asiste a todos los ciudadanos, siendo el segundo nivel aquel relacionado directamente con el proceso de investigación penal.

Así pues, la protección en este último nivel acarrea la garantía de que ningún sujeto podrá ser tildado con la calificación de delincuente sin que medie

una decisión judicial consentida que declare su responsabilidad por un hecho delictivo y aplique una sanción de acuerdo al catálogo penal; entonces, esta aplicación garantiza una secuencia de protección dentro del proceso mismo.

Es dentro de dicho proceso que se ubica la influencia del artículo 70 del Código Penal en el que se muestra la libertad para que la Policía Nacional pueda otorgar la información de la identidad de los presuntos responsables, tildándolos además como imputados, siendo esto último que tendría que discutirse de acuerdo a la fase de la investigación a fin de reconocer el perjuicio que ocasiona.

Según lo hasta aquí explicado, se aprecia un elemento limitante reconocido de la acción del principio de presunción de inocencia desde el ámbito intra proceso, lo cual se ejecuta de manera efectiva en las fases que corresponden desde el control de acusación, puesto que se verifican las garantías con las que el imputado inicia su participación en dicho proceso.

Luego interesa evaluar la forma en que se ejecutan los límites que inspiran este principio, de manera general, esto es antes del inicio del proceso que corresponde su acción sobre la actividad de la prensa, que en tanto institución social debe regirse a las reglas constitucionales que operan sobre su actuar informativo; tan es así que esta labor de comunicación si bien es cierto comprende la facultad de poder transmitir la información que corresponde al delito generado en la sociedad, debe existir el recato sobre la descripción que se hace de los sujetos que participan desde la noticia criminal hasta la acusación formal luego de la identificación del tipo penal.

Lo que se aprecia en esta explicación, es que existe una participación conjunta del principio limitante y la libertad que ampara a los medios de

comunicación para ejercer su labor social de transmisión de la data que corresponde a la realidad; ante ello debe señalarse que la actividad comunicadora tendrá que ceñirse a la fórmula de protección constitucional que ampara a todo el ordenamiento jurídico, esto es el carácter antropocentrista de las reglas, dicho de otro modo que prevalece la protección de los derechos del ser humano incluso ante los que podría corresponder a la sociedad que tiene el derecho a la información.

TOMA DE POSTURA

Bajo el entendimiento de que el ordenamiento jurídico está compuesto por reglas que manan de la Constitución y en virtud a ella marcan ciertos límites y libertades, el Derecho Penal no es ajeno a esta estructura, por lo mismo que establece en su condición de garantismo la recopilación de principios específicos que promueven la protección de quienes participan en el proceso penal, que sirve de herramienta para establecer sus reglas; siendo así, lo interesante en la discusión ha sido el reconocimiento de los límites que se han generado con el fin de establecer parámetros que permitan asegurar el cumplimiento de las garantías normativas trasladadas a la ley. Es por ello que la comprensión del principio de presunción de inocencia como límite, aplica al Estado en tanto que restringe su acción del *Ius Puniendi*, en función del derecho que aplica sobre el imputado para asegurar su garantía constitucional.

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Evaluar las publicaciones que realizan los medios de comunicación local y nacional, luego de conocerse un hecho criminal y el grado de afectación que esto genera para el investigado”.

Luego del análisis de la problemática actual sobre el alto índice de criminalidad se puede deducir que ello conlleva a la tediosa carga judicial, incluso gran parte de esa carga lo constituye procesos que no llegan a formalizar la investigación por falta de elementos de convicción de culpabilidad. Es por ello y de suma importancia la neutralidad, reserva, idoneidad y veracidad de la información que se recoge en las primeras investigaciones a cargo de la Policía Nacional como miembro auxiliar de la fiscalía.

De acuerdo a la observación realizada sobre la realidad Lambayecana, se ha podido apreciar que existe una alta actividad criminal en la ciudad de Chiclayo, tan es así que la intervención policial año tras año mantiene cifras elevadas de accionar, que de igual manera se presenta en el desempeño de las funciones que le corresponden al Ministerio Público, por lo mismo que se aprecia la incidencia de acciones a nivel inicial en las que se desarrollan las diligencias urgentes y necesarias.

Es precisamente a este nivel en el que se aprecia la publicación de noticias que consignan el nombre de los sujetos que han sido relacionados con el acto criminal que reconoce la Policía Nacional y que ésta en uso de sus atribuciones otorgadas por el artículo 70 del Código Procesal Penal, proporcionan tal información a los medios. Desde este punto de vista se debe hacer el análisis de cuan adecuado resulta el criterio que ha tenido el legislador para constituir el término imputado en dicho cuerpo legal.

Ha de servir para tal fin el hecho de que las publicaciones realizadas por los medios de prensa siempre se hacen en la primera línea de acción, esto es de manera

inmediata a la intervención policial ante un hecho delictivo; obviamente bajo el criterio de la ejecución del derecho a la información que les corresponde a los ciudadanos y el ejercicio al derecho de informar que les corresponde como medio de prensa. Lamentablemente ello consolida un espectro de sensacionalismo que se ha valido de esta permisibilidad otorgada por el artículo bajo crítica.

Siendo así, se verifica la coincidencia entre los actos urgentes y necesarios que desarrolla la Policía Nacional y el Ministerio Público con las publicaciones que se generan, lanzando a la opinión pública la identidad de sujetos sobre los cuales no se tiene la certeza jurídica de su responsabilidad penal. Esto implica la concepción de un acto vulneratorio del principio de presunción de inocencia que ha de prevalecer en función a la dignidad que le asiste a cada ser humano como sujeto de derecho.

Es por tal motivo que se advierte una secuencia incorrecta entre la publicación mediática y el verdadero sentido que debiera tener el contenido del artículo 70 del Código Procesal penal; regla que como se ha explicado puntualmente trae como consecuencia de su aplicación la vulneración del principio de presunción de inocencia, identificándose el elemento que lo considera como imputado de manera general sin hacer ninguna especificación de cuando habría de ser otorgada esta información.

TOMA DE POSTURA:

Se puede advertir que esta etapa de las diligencias urgentes y necesarias como su mismo nombre lo indica, son de gran envergadura y representan una etapa crucial para que el proceso penal se desarrolle sin implicancias externas y en completa reserva; condición última que adquiere el carácter de importancia en función a la problemática planteada por esta investigación; toda vez que, cuando la Policía Nacional en ejercicio del artículo 70 del Código Procesal Penal brinda la información de identidad del

imputado genera la posibilidad de vulneración del derecho a la identidad y el principio de presunción de inocencia, materializada a través de las publicaciones en los diarios de mayor circulación popular; aspecto que debe ser controlado de manera adecuada, sentando los parámetros específicos sobre todo en relación al concepto que involucra el término imputado dentro de la regla.

5.1.5. Discusión sobre el objetivo: “Proponer la incorporación de protocolos policiales y publicitarios que permitan garantizar el principio de presunción de inocencia del imputado antes de que se formalice la investigación”.

Atendiendo a los conceptos vertidos sobre la teoría de la confidencialidad, se ha podido advertir que su efecto tiene un carácter general, el mismo que se recoge de manera específica en el proceso penal a fin de lograr el resguardo de la información que se maneja en virtud de los actos investigativos, esto es que tanto la identidad cuanto los actos relacionados con la ejecución del delito deben ser cautelados bajo el celo del proceso penal y en función al carácter garantista que pesa sobre su estructura.

Tal cual se ha indicado, esta configuración se plasma en determinados artículos del Código adjetivo penal para concretar tal garantía mediante actos de permisibilidad y límites en su ejecución, siendo el más importante aquel que se refiere al carácter originario de la permisibilidad que opera sobre la información manejada; esto es cuando se conoce la noticia criminal, así pues el artículo 70 de dicho ordenamiento jurídico, otorga a la Policía Nacional la autorización para ceder la información sobre la identidad del imputado bajo el texto: “La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados(...)”.

Si bien es cierto sobre la cuestión que se orienta a la protección garantista del proceso penal aplica de manera directa sobre la información que se refiere a las víctimas, es un aspecto que no atañe a esta investigación, por lo mismo que la crítica durante esta discusión, se enfoca sobre la permisibilidad mostrada textualmente y la condición del imputado de aquella persona que se encuentra inmersa en un evento delictivo. Es posible notar con ello que existe una diferenciación que en ciertos casos es válida para saltar el principio de igualdad ante la ley, pero para este caso no se aprecia un elemento sólido que

lo permita y más bien se percibe una vulneración del principio de presunción de inocencia, dado que no se especifica en qué nivel de la investigación se ha de ejecutar el contenido de dicha regla.

Sobre la cuestión del nivel de la investigación, como se ha visto en la tesis, existe aún una controversia que no dilucida con claridad si ha de comprenderse a un sujeto bajo la categoría de imputado, desde el momento que se conoce la noticia criminal o cuando se haya formalizado la investigación. Ante esta circunstancia dubitativa tendría que aplicarse el principio de presunción de inocencia en base a que las incertidumbres deben resolverse en beneficio del investigado.

El cuestionamiento que se hubo planteado de manera inicial ha obtenido una respuesta que permite identificar la existencia del problema vulneratorio, sobre lo cual conviene hacer razonamientos lógicos que conlleven hacia una propuesta adecuada; si bien es cierto que la construcción del objetivo que se discute, señala la incorporación de protocolos policiales y publicitarios que permitan la garantía del principio de presunción de inocencia, luego, el desarrollo de la tesis advirtió la existencia de un problema regulatorio de carácter originario que se ubica en el artículo 70 del Código Procesal Penal, puesto que de su ejecución parte el efecto de vulneración que advierte esta investigación.

Entonces, siendo la construcción de dicho artículo, la que estaría provocando la alteración de la garantía que comprende el principio de presunción de inocencia en función a la confidencialidad de la identidad del investigado a nivel de las diligencias urgentes e inaplazables, la propuesta de cambio tendrá que adoptarse en función al condicionamiento que se plasma en dicha regla, esto es al carácter de imputado que se incorpora, así pues las acciones que ejecutan la Policía Nacional y los medios de comunicación al publicitar la identidad del sujeto inmerso en un acto delictivo, están

vulnerando el principio de presunción de inocencia; acción que sólo podrá limitarse si es que dicha regla especifica que se considera imputado desde la fase de formalización de la investigación.

Solamente con esta precisión podrá aportarse con elementos jurídicos que conlleven a la solución del problema que actualmente se advierte, sin calar en los derechos de información que les está reconocido a los medios de prensa puesto que toda su ejecución también comprende el respecto de la estructura constitucional que opera en función a principios; siendo así, la conjetura de que su actuar tal cual se ha mostrado al inicio de la intervención policial, estaría afectando a un principio mucho mayor que el de la libertad de comunicación, puesto que altera la dignidad del ser humano que se constituye como el eje de la concepción constitucional antropocentrista.

Sobre este argumento, se puede indicar que no es preciso incorporar o crear protocolos específicos para la ejecución adecuada de la actividad sobre todo de los medios de comunicación, puesto que sería una alteración a la libertad de prensa; en ese sentido lo que corresponde según la observación, es necesaria una especificación puntual incorporada al artículo 70 del Código Procesal Penal, que aclare la condición del imputado, puesto que se ha determinado con el análisis que el problema de acceso para los medios de comunicación en el primer nivel de las diligencias urgentes e inaplazables, correspondería a un efecto directo de esta regla.

TOMA DE POSTURA:

Proponer la incorporación de protocolos policiales y publicitarios que permitan garantizar el principio de presunción de inocencia del imputado antes de que se formalice la investigación

La última meta de esta investigación se hubo propuesto como la incorporación de protocolos policiales y publicitarios para garantizar el principio de presunción de inocencia del imputado antes de que se formalice la investigación; sin embargo el desarrollo de la tesis, mediante la metodología de recopilación de fuentes bibliográficas y el análisis de la realidad mediante la observación, ha permitido reconocer el origen del problema que se planteó inicialmente y dice: ¿De qué manera la no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación, afecta el principio de presunción de inocencia?, siendo este, la construcción del artículo 70 del Código Procesal Penal.

En ese sentido es que la propuesta sufre una variación a fin de establecer un control más directo sobre la propia regla que permite a la Policía Nacional proporcionar datos sobre la identidad del imputado, lo cual requiere de una especificación puntual sobre la condición del sujeto sobre el cual puede disponerse de su derecho a la identidad, puesto que la orientación de la regla en cuestión genera esa permisibilidad. Dicha condición legal supera el límite de la protección constitucional que opera sobre las garantías del derecho a la identidad y el principio de presunción de inocencia, puesto que al inicio de la sub fase conocida como diligencias urgentes e inaplazables, el sujeto inmerso en el acto delictivo que interviene la Policía Nacional, aún no tiene la condición de imputado, dado que esta sólo se la puede otorgar a través de la función jurisdiccional al momento de admitir la formalización de la investigación.

Por todo ello, resultará útil al fortalecimiento de la garantía de presunción de inocencia del investigado el hecho de adecuar el artículo 70 para que se distinga entre la condición de un imputado y el sujeto que es intervenido por la Policía Nacional, cuya conducta aún no ha sido evaluada por la instancia pertinente.

5.2. La validación de las variables

Luego de haber alcanzado tomas de postura a través de la discusión desarrollada sobre los contenidos de la investigación, se ha concebido la lógica de agrupar dichos resultados a manera de sintieses en función a la correspondencia con cada una de las variables, lo cual ha permitido alcanzar determinaciones puntuales que validan su contenido, así pues, se convierten en los nuevos ejes sobre los que construye la determinación final.

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta que la variable bajo examen de validación ha sido concebida como la causa del problema, se deberá asumir la realidad estatal respecto al tratamiento del crimen, desde el punto de vista procesal; situación que aún no alcanza el óptimo nivel que se espera, puesto que se puede apreciar que le urge al Estado hacer visible un ambiente de seguridad jurídica eficiente, donde la presunción de inocencia marque verdaderamente un límite constitucional al accionar del Ius Puniendi y donde aquel principio logre su alcance extraprocesal para salvaguardar con ello, los derechos fundamentales de las personas inmersas, a su vez, en un proceso penal.

La confidencialidad como teoría es la que garantiza que toda aquella información recopilada del estado criminal y otros datos personales, que manejan las instituciones públicas, serán protegidos y no podrán ser divulgados sin consentimiento expreso. La ausencia de control constitucional sobre los efectos que surgen al aplicar la regla contenida en el artículo 70 del Código Procesal Penal, resulta viable sólo en función al

argumento encontrado en la revisión doctrinaria de otros límites, en este contexto normativo para conseguir un argumento sólido sobre la propuesta que coadyuve a una verdadera protección garantista, debe ubicarse los medios que superen dichos principios.

Los límites constitucionales para el accionar de los medios de comunicación y su relación con el derecho penal implican uno de los ejes que sustentan el problema real de la investigación, es por ello que ha recaído en el especial cuidado la revisión del contenido constitucional que opera sobre cada uno de ellos para contrastarlo con el que corresponde a la estructura del proceso penal. La limitación se traslada como labor esencial del principio de presunción de inocencia, al cual según parece no se ha prestado atención para liberar la posibilidad de acceder a la información sobre la identidad del imputado en una investigación.

Siendo así, la regla del artículo 70 del Código Procesal Penal, se extralimita respecto al principio de presunción de inocencia en base a la dignidad humana, elemento que trae como consecuencia una liberación de las acciones de los medios de comunicación para tomar dicha información y darle un tratamiento sensacionalista que termina por vulnerar la garantía constitucional que protege la inocencia de cada sujeto; justificándose por ello la contemplación del ámbito de protección extra procesal de dicho principio.

Se puede advertir que la etapa de las diligencias urgentes e inaplazables como su mismo nombre lo indica, son de gran envergadura y representan una fase crucial para que el proceso penal se desarrolle sin implicancias externas y en completa reserva; condición última que adquiere el carácter de importancia en función a la problemática planteada por esta investigación; toda vez que, cuando la Policía Nacional en ejercicio del artículo 70 del Código Procesal Penal brinda la información de identidad del imputado genera la posibilidad de vulneración del derecho a la identidad y el principio de presunción de

inocencia, materializada a través de las publicaciones en los diarios de mayor circulación popular; aspecto que debe ser controlado de manera adecuada, sentando los parámetros específicos sobre todo en relación al concepto que involucra el término imputado dentro de la regla; en función a todo lo descrito, la variable independiente termina su validación de la siguiente manera:

La no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación requiere del control constitucional para garantizar los principios garantistas del proceso penal.

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La afectación del principio de presunción de inocencia.

De acuerdo a la validación de la variable independiente se debe ejecutar la que corresponde a esta variable asumiéndola como el efecto de la anterior, a fin de comprender la nueva relación causal que ofrecen; por lo mismo que se debe partir de la idea de un Derecho Penal que establece en su condición de garantismo la recopilación de principios específicos que promueven la protección de quienes participan en el proceso penal, que sirve de herramienta para establecer sus reglas; por ello, la comprensión del principio de presunción de inocencia como límite, aplica al Estado en tanto que restringe su acción del Ius Puniendi, en función del derecho que le corresponde al imputado para asegurar su garantía constitucional.

En base a dicho argumento, el desarrollo de la tesis, mediante la metodología de recopilación de fuentes bibliográficas y el análisis de la realidad mediante la observación, ha permitido reconocer el origen del problema que se planteó inicialmente, siendo este, la construcción del artículo 70 del Código Procesal Penal; regla que permite a la Policía

Nacional proporcionar datos sobre la identidad del imputado, lo cual requiere de una especificación puntual sobre la condición del sujeto sobre el cual puede disponerse de su derecho a la identidad, puesto que la orientación de la regla en cuestión genera esa permisibilidad. Se espera con ello, fortalecer la garantía de presunción de inocencia del investigado el hecho de adecuar el artículo 70 para que se distinga entre la condición de un imputado y el sujeto que es intervenido por la Policía Nacional, cuya conducta aún no ha sido evaluada por la instancia pertinente; en función a todo lo analizado, la variable dependiente termina validándose de la siguiente manera:

La afectación del principio de presunción de inocencia manifestada en la aplicación del artículo 70 del Código Procesal Penal, requiere del acomodo de esta regla para especificar límites a su ejecución.

5.3. La contrastación de hipótesis

Conforme se ha venido explicando, el desarrollo de esta tesis está vinculada con un orden lógico que le otorga cientificidad al resultado, así pues, la validación de las dos variables ha generado mediante su unión una determinación final que resulta ser la síntesis de todo lo analizado y se construye de la siguiente manera:

Hipótesis conclusiva:

La no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación requiere del control constitucional para garantizar los principios garantistas del proceso penal; puesto que trae como consecuencia la afectación del principio de presunción de inocencia manifestada en la aplicación del artículo 70 del Código Procesal Penal, requiriéndose del acomodo de esta regla para especificar límites a su ejecución.

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA
<p>La no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación, afecta el principio de presunción de inocencia, por lo que se requerirá el control de dicha actividad.</p>	<p>La no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación requiere del control constitucional para garantizar los principios garantistas del proceso penal; puesto que trae como consecuencia la afectación del principio de presunción de inocencia manifestada en la aplicación del artículo 70 del Código Procesal Penal, requiriéndose del acomodo de esta regla para especificar límites a su ejecución.</p>

¿Qué diferencias existen entre la hipótesis inicial y la conclusiva?

La diferencia principal es que la hipótesis inicial es una posible respuesta general del problema, mientras que la conclusiva abarca más aspectos específicos a su vez detalla el origen del problema y logra proponer alternativas para su mejoramiento, todo ello en base a la construcción científica que la inspira.

De lo antes mencionado, se puede verificar que la hipótesis inicial implica que la no confidencialidad de las diligencias urgentes e inaplazables por parte de la Policía Nacional del Perú y la intromisión de los medios de comunicación afectan el principio de presunción de inocencia; por lo tanto, dicha actividad requiere de un control más relevante por parte del Estado a través de múltiples mecanismos de orden constitucional. Dicho control por parte del Estado se debería direccionar por el sentido intrínseco del Principio de presunción de inocencia, el cual conlleva a definirse como parámetro de control constitucional - procesal dentro de la esfera de protección de los Derechos Fundamentales.

No obstante, la hipótesis conclusiva se expone un tanto más, ya que no solo identifica la urgencia del Estado por implementar mecanismos para que se lleve a cabo un control constitucional que garantice la permanencia y respeto no solo del principio en mención sino, de los muchos otros, con rango constitucional. También determina un posible origen de dicha afectación, debido a la permisibilidad legal que confiere el artículo 70 del Código Procesal Penal a cuya letra dice: *“La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren resultar*

vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa autorización del Fiscal.”

Bajo este reconocimiento del origen del problema, es que se ha podido percibir y trasladar a la hipótesis conclusiva, la necesidad de que tenga que regularse de manera adecuada esta potestad otorgada a la institución policial, por lo mismo que se indica la sugerencia de un acomodo orientado a la especificación de aquella condición que le corresponde al investigado, esto es, aclarar que el sujeto sólo puede ser considerado como imputado en tanto se haya formalizado la investigación.

¿Puede asumirse la hipótesis conclusiva como una prueba de la inicial?

En lo que se refiere a la determinación final de la investigación, se puede reconocer como una prueba directa de la hipótesis inicial, basado en dos aspectos; en primer lugar el hecho de que se corrobora la necesidad de control y mediante el desarrollo de la tesis se ha podido verificar la existencia de vulneraciones directas sobre el sentido de protección que involucra al investigado, entre los cuales se ubica a la presunción de inocencia que básicamente se observa desde el punto de vista de la dignidad que le corresponde como persona.

De otro lado, se ha de considerar el aspecto que corrobora tal vulneración mediante la aplicación de la regla contenida en el artículo 70 del Código Procesal Penal, puesto que genera la libertad otorgada a la Policía Nacional para liberar la información sobre la identidad del imputado, término que según lo desarrollado en la tesis, no debería usarse de manera deliberada, dada su encaje a partir de la fase en la que se formaliza la investigación; siendo así, el momento en que se aplica como es en las diligencias urgentes e inaplazables, al tener dicha condición, su identidad deberá estar bajo el resguardo de la

teoría de la confidencialidad que unida al principio de presunción de inocencia, tendría que asumirse como una protección total.

Bajo estas indicaciones, se puede entonces reconocer a la determinación final como una prueba directa de la hipótesis inicial, quedando contrastada y permitiendo con ello la postura que permite establecer las conclusiones y recomendaciones que se plasman a continuación bajo el enlace directo de los objetivos específicos.

¿Qué propuestas se desprenden de la construcción de la hipótesis conclusiva?

Una directiva para el fiscal en su condición de defensor de la legalidad para que implemente mecanismos de control para el tratamiento del detenido por parte de la policía nacional del Perú en uso de sus atribuciones del artículo.

Conclusiones

Primera:

Se puede concluir en base al estudio de la teoría de la confidencialidad, que resulta útil para lograr un ambiente de seguridad jurídica eficiente, donde la presunción de inocencia marque verdaderamente un límite constitucional al accionar del Ius Puniendi con alcance extraprocesal. Con ello se garantiza que toda aquella información recopilada del estado criminal y otros datos personales, que manejan las instituciones públicas, serán protegidos y no podrán ser divulgados sin consentimiento expreso. Lamentablemente se aprecia la ausencia de control constitucional sobre los efectos que surgen al aplicar la regla contenida en el artículo 70 del Código Procesal Penal, por lo mismo que resulta viable la revisión doctrinaria de otros límites que coadyuven a una verdadera protección garantista.

Segunda

Se ha logrado establecer que respecto a los límites constitucionales para el accionar de los medios de comunicación y su relación con el derecho penal existen parámetros para el control de la acción relacionado a la dignidad del ser humano; lo cual no alcanza a cuestiones específicas para determinar la existencia de vulneraciones explícitas, por ello la limitación se traslada como labor esencial del principio de presunción de inocencia, el cual se ha liberado como posibilidad de acceder a la información sobre la identidad del imputado en una investigación. Es evidente la ausencia de control constitucional en la regla del artículo 70 del Código Procesal Penal, puesto que sale del límite que plantea el principio de presunción de inocencia en base a la dignidad

humana, elemento que trae como consecuencia una liberación de las acciones de los medios de comunicación para tomar dicha información y darle un tratamiento sensacionalista que termina por vulnerar la garantía constitucional que protege la inocencia de cada sujeto; justificándose por ello la contemplación del ámbito de protección extra procesal de dicho principio.

Tercera:

Se concluye en base a la revisión de los límites para lograr la garantía de la presunción de inocencia que, se establece en la condición de garantismo la recopilación de principios específicos que promueven la protección de quienes participan en el proceso penal, que sirve de herramienta para establecer sus reglas; siendo así, se reconocen los límites que se han generado con el fin de establecer parámetros que permitan asegurar el cumplimiento de las garantías normativas trasladadas a la ley. Es por ello que la comprensión del principio de presunción de inocencia como límite, corresponde al Estado en tanto que restringe su acción del Ius Puniendi, en función del derecho que aplica sobre el imputado para asegurar su garantía constitucional.

Cuarta:

Se ha establecido luego de revisar las publicaciones sobre hechos criminales que se producen en la etapa de las diligencias urgentes e inaplazables como su mismo nombre lo indica, son de gran envergadura y representan una etapa crucial para que el proceso penal se desarrolle sin implicancias externas y en completa reserva; condición última que adquiere el carácter de importancia en función a la problemática planteada por esta investigación; toda vez que, cuando la Policía Nacional en ejercicio del artículo 70 del Código Procesal Penal brinda la información de identidad del imputado genera la posibilidad de vulneración del derecho a la identidad y el principio de presunción de

inocencia, materializada a través de las publicaciones en los diarios de mayor circulación popular; aspecto que debe ser controlado de manera adecuada, sentando los parámetros específicos sobre todo en relación al concepto que involucra el término imputado dentro de la regla.

Quinta:

Finalmente se llega a la determinación que, respecto a la propuesta de la incorporación de protocolos policiales y publicitarios para garantizar el principio de presunción de inocencia del imputado antes de que se formalice la investigación; no es la medida más adecuada, puesto que debe atenderse el origen del problema que se planteó inicialmente relacionado a la no confidencialidad de las diligencias urgentes e inaplazables por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación, afecta el principio de presunción de inocencia?, siendo este, la construcción del artículo 70 del Código Procesal Penal. Dicha condición legal supera el límite de la protección constitucional que opera sobre las garantías del derecho a la identidad y el principio de presunción de inocencia, puesto que al inicio de la sub fase conocida como diligencias urgentes e inaplazables, el sujeto inmerso en el acto delictivo que interviene la Policía Nacional, aún no tiene la condición de imputado, dado que esta sólo se la puede otorgar a través de la función jurisdiccional al momento de admitir la formalización de la investigación.

RECOMENDACIONES

PRIMERA

Se recomienda al Estado peruano fortalecer la garantía de presunción de inocencia del investigado mediante el hecho de adecuar el artículo 70 para que se distinga entre la condición de un imputado y el sujeto que es intervenido por la Policía Nacional, cuya conducta aún no ha sido evaluada por la instancia pertinente.

SEGUNDA

Se sugiere que el fortalecimiento de la garantía de presunción de inocencia deberá atribuirse a la construcción del artículo 70° del ordenamiento procesal penal, se materialice mediante la especificación del concepto de imputado a fin de generar el límite que permita la ejecución de tal garantía, y debe ser de la siguiente manera:

Código Procesal Penal

Art. 70: “*La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados, **en tanto se haya formalizado la investigación (...)***”

Bibliografía

- Arocena , G. A. (2012). La regulación de los datos Informaticos en el código penal argentino. Introducción a la ley Nacional N° 26.388. *Scielo*, 945-988 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000300002
- Arpasi Pacho, J. H. (2018). Constitucionalidad de los actos de investigación ordenado por el juez de investigación preparatoria, regulación y tratamiento en le derecho comparado. *Universidad Nacional del Altiplano*, 1-81 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/9606/Javier_Hilbert_Arpasi_Pacho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Benavente Chorres, H. (2009). El derecho constitucional a la presunción de inocencia en Perú y México, así como su relación con los demas derechos constitucionales. *Scielo*, 59-89. Recuperado el 24 de Julio de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000100003
- Bustios, R. (Julio - Septiembre de 1994). El concepto de libertad de información a partir de su distinción de la libertad de expresión. *Nueva época. Revista de estudios políticos*(85), 261-289. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/27279.pdf>
- Capodiferro, D. (2017). La libertad de información frente a internet. *Revista de Derecho Político. UNED*(100), 701-737. Obtenido de <http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/download/20715/17214>

- Cerbino , M. (2005). La violencia en los medios de comunicación generación noticiosa y persecución ciudadana. *Flacso*, 1-164. Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/46114.pdf>
- Desantes Guanter, J. M. (1991). De la Libertad de Expresión al Derecho a la Información. *Persona y Derecho*, XXIV.
- Eguiguren Praeli, F. (1995). La libertad de información y su relacion con los derechos a la intimidad y al honor en el caso peruano. *Revista PUCP*, 51-75 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/15924/16349/0>
- Ferrer Beltrán, J. (2010). Una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, IV(1), 1-26. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/2393/2341>
- Higa Silva , C. (s.f.). El derecho a la presunción de inocencia desde un punto de vista Cosntitucional. *Revista PUCP*, 113-120. Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/12793/13350/>
- Jiménez Suárez, L. E. (2019). El rol de la Policia Nacional Del Perú y la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos: una nueva aproximación desde el Nuevo Código Procesal Penal. *Universidad de San Martín De Porres*, 1-156 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/4758/jim%C3%A9nez_sle.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Llobet Rodríguez, J. (2009). Prisión preventiva, presunción de inocencia y proporcionalidad en el código procesal penal modelo para iberoamérica de 1988. *Revista digital de la Maestría en Ciencias Penales De La Universidad De Costa Rica*, 161- 220 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/download/12629/11885/>
- Mayer Lux, L. (2017). El bien Jurídico protegido en los delitos informáticos. *Scielo*, 235-260 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372017000100011
- Muños Quispe, L. L. (2018). Protección Penal de la intimidad Personal en la redes socilaes. *Universidad Nacional Del Altiplano*, 1-114 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/9897/Mu%C3%B1oz_Quispe_Lenin_Leonir.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Murriagui Cardenas, C. E. (2019). El plazo razonable en la investigación preliminar en el distrito fícal de Huancavelica. *Universidad Federico Villareal*, 1-93 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3300/MURRIAGUI%20CARDENAS%20CECILIA%20ELVIRA%20-%20MAESTRIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre la población a estudio. *Int. J. Mothpol*, 227-232. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>

- Ovejero Puente , A. M. (2017). Protección del Derecho a la Presunción de inocencia. *Revista Uned*, 431-455 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/download/20913/17387>
- Policía Nacional del Perú. (2018). *Anuario Estadístico 2018*. Lima: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Obtenido de Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones: https://capacitacion.sutran.gob.pe/pluginfile.php/12381/mod_folder/content/0/ANUARIO%20Estad%C3%ADstico%20PNP%202018.pdf?forcedownload=1
- Riascos Gómez, L. O. (2012). Los Delitos Contra los Datos personales y el habeas data en la Ley 1273 de 2009. *Revista UPTC*, 335-429 . Recuperado el 24 de Julio de 2020 , de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/download/4868/3960/
- Ríos Patio, G. (2019). La información policial sobre la identidad del imputado: la criminología mediática en el proceso de construcción del enemigo. *Revista PUCP*, 207-218. Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/21222/20927/>
- Rodríguez Hurtado , M. P. (2010). Los sujetos procesales en le Código Procesal Peruano 2004 (acusatorio, garantizador, de tendencias adversativas, eficientes y eficaz). *Revista PUCP*, 135- 157. Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/3140/2962/>

Rodríguez, M. A. (10 de Febrero de 2017). *El Blog de De Torquemada - Derecho Procesal Penal y otros temas de derecho general*. . Obtenido de <https://detorquemada.wordpress.com/2010/08/05/secretodelainvestigacion/>

Viola Demestre , I. (2010). La confidencialidad en el procedimiento de mediación. *Redalyc*, 1-10 . Recuperado el 24 de Julio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/788/78817024004.pdf>

Walpole, R., & Myers, R. (1966). *Probabilidad y estadística* (Cuarta ed.). México: McGraw_Hill.

ANEXOS

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

“La confidencialidad de la policía nacional e intromisión de los medios de comunicación, frente al principio de presunción de inocencia”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

- I. Variable independiente: La no confidencialidad de las diligencias urgentes por parte de la Policía Nacional y la intromisión de los medios de comunicación.**

1. La teoría de la confidencialidad se asume sobre el tratamiento de la información contenida en el marco de la investigación para garantizar el ámbito de protección sobre los derechos del implicado.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

2. En el inicio de la investigación de la acción delictiva, al desarrollarse las diligencias urgentes e inaplazables, se advierte la ausencia de límites al acceso de la información, generado por el artículo 70 del Código Procesal Penal, lo que conlleva a la no confidencialidad.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

3. Se podrá armonizar el control de garantías que le corresponde al Estado a través de su intervención mediante la regla procesal penal, con la protección de la información al inicio de la investigación, sólo con la especificación de la descripción que se hace en el artículo 70 respecto a la libertad de brindar información sobre la identidad del imputado.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

II. Variable dependiente: La afectación del principio de presunción de inocencia.

4. Asumiendo el aforismo de que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad judicialmente, tal presunción opera sobre todos los niveles de la investigación, incluso durante las diligencias urgentes e inaplazables y el correspondiente ámbito extraprocesal.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

5. La falta de contemplación del ámbito de protección del principio de presunción de inocencia a nivel extrapenal por parte del legislador ha generado la construcción del artículo 70 del Código Procesal Penal, con el matiz extralimitado de la permisibilidad para brindar información.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

6. Se podrá consolidar la garantía que ofrece el principio de presunción de inocencia en el ámbito extrapenal, con la especificación de un límite a la información que se brinda según lo contemplado en el artículo 70 del Código Procesal Penal, en base a la teoría de la confidencialidad que le asiste al proceso, para ser respetado por la Policía Nacional y los medios de comunicación con los que se vincula.
- a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9zvZJwxGuCDNs48RcTHepMXQmfTdT5YD97BkA13mivmabOQ/viewform?usp=sf_link